LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN BOGOTÁ:

EL CASO DE LOS EMBERÁ KATÍO

Luz Dary Orozco Nieto

Universidad Santo Tomás

Facultad de Derecho

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario Ante

Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales

Bogotá D.C., Marzo 2020

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN BOGOTÁ:

EL CASO DE LOS EMBERÁ KATÍO

Luz Dary Orozco Nieto

Trabajo de grado para optar al título de

Magister en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y

Cortes Internacionales

Sandra Milena Molina Pelaez

Directora

Universidad Santo Tomás

Facultad de Derecho

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario Ante

Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales

Bogotá D.C., marzo 2020

Tabla de Contenido

	Pág.
Resumen	8
Introducción	9
Los Derechos Humanos comunidades indígenas en Bogota: el caso de los emberá Katío.....	11
Instrumentos Internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas	13
1. Migraciones indígenas a la ciudad: el caso de los Emberá-katío en Bogotá	38
1.1. Antecedentes	38
1.2. Quiénes son y dónde viven los indígenas en Bogotá	41
1.3. Papel de los indígenas en la economía de la ciudad	43
1.4. La población indígena en Colombia frente a la cifras de los sistemas de información:	45
1.5. Cabildos Indígenas urbanos.....	47
1.6. Políticas públicas para indígenas urbanos.....	51
2. Pueblo Emberá.....	57
2.1. ¿Quiénes son los Emberá?	57

2.2. Reseña etnohistórica	58
2.3. Economía	61
2.4. Organización social y política	61
2.5. El pueblo Emberá es víctima de la violencia en medio del conflicto interno armado	62
3. Asentamiento del pueblo Emberá–Katío en Bogotá una mirada desde la Defensa de los Derechos Humanos	75
3.1. Acompañamiento y verificación de cumplimiento de los compromisos	80
3.2. Alcance de la política pública Distrital frente a la Defensa de los Derechos Humanos	90
Referencias	101

Índice de Cuadros

	Pág.
Cuadro No. 1 Comité interinstitucional... ..	54
Cuadro No. 2 Presupuesto Proyecto 888	59

Índice de Graficas

Pág.

Grafica 1. Total población indígena desplazada en ciudades capitales.....	22
---	----

Índice de Anexos

Pág.

Anexo 1. Total de Población indígena en las ciudades capitales del país. DANE	73
Anexo 2. Total de Población Indígena (Dane) en ciudades y total de población desplazada en el RUPD.....	76
Anexo 3. Listado de población Emberá Katío en el alojamiento Calle 18, Avenida Caracas No. 14-56.....	84
Anexo 4. Acciones y actividades en el acompañamiento a los estudiantes de las etnias Embera-Katío.	108

Índice de Tablas

	Pág.
TABLA 1. DISTRIBUCION POR LOCALIDADES DE LA POBLACION INDIGENA EN BOGOTA....	17
TABLA 2. CIFRAS COMPARADAS CENSO 1993 VS 2005.....	20
TABLA 3. POBLACION INDIGENA DESPLAZADA POR CIUDADES	21
TABLA 2. VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH DEL PUEBLO EMBERÁ 2002-2010	35

Resumen

El presente trabajo hace parte de la Línea de investigación Movimientos sociales y Derechos Humanos, inicialmente presenta la evolución del movimiento social indígena y las migraciones indígenas, este consta de tres (3) capítulos: el primero hace referencia a la evolución del movimiento social indígena, el cómo se han insertado los indígenas de distintos pueblos en las dinámicas de construcción de ciudad, el quehacer de los indígenas en el campo laboral urbano, su ubicación en la ciudad, su organización y las políticas públicas para indígenas urbanos. El segundo capítulo, es la investigación sobre el pueblo indígena Emberá-katío desde su historia, economía, organización social y su lugar en el conflicto interno armado colombiano. El tercer capítulo, es la presentación del estudio de caso realizado con las 48 familias indígenas Emberá-katío residentes del alojamiento de la calle 18 con Caracas en el centro de Bogotá.

Introducción

El presente trabajo de Grado de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales, incluido en la línea de investigación Movimientos Sociales y Derechos Humanos, busca concienciar al interior de la academia, organizaciones sociales, instituciones estatales de ámbito distrital y nacional, organismos de derechos humanos y de la sociedad en general, sobre la situación actual de los pueblos indígenas en situación de desplazamiento en Bogotá.

La Defensa de los Derechos Humanos y el DIH, y muy especialmente la evolución de los movimientos sociales, han tomado gran importancia ante las graves violaciones a los Derechos Humanos que se originan por el conflicto interno armado causa del desplazamiento forzado y que golpean especialmente a los pueblos indígenas, eje central de esta investigación, que tiene como objetivo identificar si el Distrito Capital es garante de los Derechos Humanos de la población

indígena desplazada, y si cuenta con política pública con enfoque étnico a la luz de la normativa Nacional e Internacional de los Derechos Humanos.

Mediante la investigación y el trabajo de campo realizado con la población indígena Emberá-katío, reubicada en el alojamiento de la calle 18 con Caracas en el centro de Bogotá, durante el periodo diciembre de 2015 a agosto de 2016, por medio del acompañamiento semanal en el comité interinstitucional de seguimiento a los compromisos del Distrito y las entidades nacionales en cuanto a la garantía, restablecimiento y de protección los Derechos Humanos.

El trabajo realizado fue de índole cualitativo e investigativo, con base en el contacto directo con las familias Embera-katio y sus líderes, conocer sus necesidades e inquietudes en dialogo abierto sobre temas de salud, educación, alimentación, retorno, el fortalecimiento del gobierno propio y la convivencia, asimismo se concretaron acciones por parte de las instituciones distritales y nacionales, quedando registrados los compromisos, los logros y alcances en el acceso a los servicios, en las actas semanales de reunión.

LOS DERECHOS HUMANOS COMUNIDADES INDÍGENAS EN BOGOTÁ: EL CASO DE LOS EMBERÁ KATÍO

El papel preponderante de la lucha que ha dado el movimiento social indígena en defensa de sus derechos, que se remonta aun al tiempo de la conquista y que llega a nuestros días, es necesario traer a la memoria la historia de esta lucha, desde la llegada de los conquistadores y su terrible acción de saqueo, profanación a la cultura indígena, trayendo enfermedades mortales, abusos y despojo, que con instituciones como el resguardo, la imposición de la lengua española y de la religión católica marcaron siglos de sufrimiento y muerte para la población indígena, uno de los registros más importantes de esta historia es el memorial del cacique de Turmequé dirigido al Rey de España en 1584 cuyos tres (3) ejes principales: el primero, la defensa de la tierra y del régimen comunal; segundo, la defensa del derecho a gobernarse por sus propias autoridades y bajo sus propias normas de vida; y, tercero, el derecho a mantener y ejercer sus propias manifestaciones culturales, que son vigentes aun en pleno siglo XXI. La historia nos relata la magnitud de los maltratos y despojos de que fueron víctimas los indígenas durante muchos siglos, ya en el siglo XIX encontramos el Decreto del Libertador de 1820, mediante el cual ordenó la devolución de las tierras de los resguardos, usurpadas a los indígenas, pero no detuvo la crueldad ni los abusos en contra de los indígenas, es así como en 1891 la Ley 89 que buscaba hacer menos drástico el proceso de disolución de los resguardos y la repartición de sus tierras, el papel de tutela y civilización de las misiones religiosas, y establecía asimismo un procedimiento preciso para que los indígenas registraran sus títulos antiguos, ya en 1905 con la Ley 55, que confirma la potestad de los entes territoriales para extinguir los resguardos, origina las luchas el célebre caudillo indígena del pueblo

Nasa, Manuel Quintín Lame, quién promovió un levantamiento entre 1914 y 1918 en el departamento del Cauca, con su programa de lucha de siete puntos de gran trascendencia en el movimiento social indígena: 1) La recuperación de las tierras de los resguardos 2) La ampliación de las tierras de los resguardos 3) El fortalecimiento de los cabildos 4) El no pago del terraje 5) Dar a conocer las leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicación 6) Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas 7) Formar profesores indígenas. La década de los sesenta del siglo pasado corresponde a un período trascendental en la historia indígena por darse por vez primera un debate público de nivel nacional sobre los problemas que vivían estos pueblos. En 1961 la Ley 135 de Reforma Agraria ocupadas por la misión capuchina, reclamadas por los indígenas en el valle de Sibundoy, Putumayo, trajo una luz de esperanza a los indígenas de la selva y de los Andes, y fue en 1971 en el municipio indígena de Toribío donde se constituyó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), este fue el primer movimiento indígena que cobijaba varios grupos étnicos, pero se presentaron pugnas al interior lo que hizo que en el tercer congreso de la Anuc, en 1974, los indígenas se retiraran. Es en el años siguiente que nace el periódico, Unidad Indígena, de gran valor para el fortalecimiento del movimiento social indígena, en esta época se conformaron numerosas organizaciones regionales en los actuales departamentos de Chocó, Antioquia, Caldas y Risaralda, y en la Sierra Nevada de Santa Marta, la primera movilización indígena nacional se realizó en el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) y fue en 1980 que se eligió una coordinadora nacional indígena en oposición a las disposiciones del gobierno. En 1982 se fundó la Organización Nacional Indígena, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia ONIC (Molina, Sánchez, 2010).

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

El marco normativo que da sustento al bloque de constitucionalidad en Colombia está conformado por los artículos 9, 93 y 53 de la Constitución que refieren de modo claro cómo se insertan al ordenamiento interno las normas internacionales. El artículo 9 enuncia que las relaciones exteriores están fundamentadas en la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Por su parte, el artículo 53 dispone que los convenios internacionales del trabajo hacen parte de la legislación interna, y el artículo 93 establece que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso de la República tienen prevalencia en el ordenamiento legal nacional. Complementario a lo anterior, sobre el alcance de los derechos constitucionales, el artículo 94 aclara que: *“La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”*, y el artículo 214 clama por el respeto y aplicación de las reglas del Derecho Internacional Humanitario y la no suspensión de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En este marco, es de entenderse que los derechos humanos en Colombia consagrados o no en la Constitución, deben interpretarse en consonancia con los principios del derecho internacional

aceptados por Colombia y con los tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, y con base en las anteriores normas la Corte Constitucional, como “...guarda de la integridad y supremacía de la constitución”, encomendada por el artículo 241 de la Carta Política, dio vida jurisprudencial al denominado bloque de constitucionalidad en los siguientes términos:

“El bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reformas diversas al de las normas del articulado constitucional stricto sensu”. (Sentencia C-225, 1995).

En estos términos, precisa la Corte que el bloque de constitucionalidad se encuentra amparado en la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales y las leyes humanitarias ratificadas por el Estado colombiano.

Tomando como base el bloque de constitucionalidad, se puede concluir, para los efectos de este trabajo, que los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia están reconocidos no solo en la letra de la Constitución Política, sino también en los diferentes instrumentos internacionales ratificados por Colombia que hacen relación a derechos diferenciales de sujetos colectivos culturales. Estos son, como se desarrolla en la siguiente parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales - PIDESC, el Pacto para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, los cuales son antecedentes obligatorios de los recientes instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, que aparecen de modo explícito en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además de estos, también se pueden enunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Americana de Derechos Humanos en el sistema regional y del sistema universal, lo mismo que los convenios relativos a la Diversidad Biológica y el Tratado sobre Bosques. Dado que los anteriores convenios están incorporados a la normatividad constitucional, en consecuencia, de ello también hace parte del bloque de constitucionalidad la jurisprudencia de los órganos de los respectivos sistemas internacionales encargados de velar por su adecuada aplicación y cumplimiento, como son los respectivos comités de Naciones Unidas y de la OIT y, en el sistema regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH y la Corte IDH.

PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la ONU en 1966, fue aprobado por el Congreso de la república de Colombia mediante la Ley número 74 de 1968. El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue suscrito por Colombia el 23 de marzo de 1976. Ambos pactos son de trascendental importancia para los indígenas, pues a partir de la estipulación contenida en el Artículo 1º común a los pactos, comenzaron a reclamar su reconocimiento como “pueblos” y sus derechos a la autodeterminación como tales. Tal Artículo 1º, dice: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho,

establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural.”

A pesar de que la ONU no ha aceptado formalmente que el término pueblos a que se refieren los dos pactos incluya a las poblaciones indígenas, y ha interpretado que el derecho de libre determinación no puede ser invocado contra Estados soberanos (Stavenhagen, 1998), ello no ha sido obstáculo para el desenvolvimiento de las reclamaciones indígenas, logrando finalmente que el término “pueblos” fuera aceptado posteriormente por la OIT en el Convenio 169, con las salvedades que en su momento se explicarán, y que la jurisprudencia y doctrina internacionales reconocieran la aplicabilidad de estos instrumentos a los pueblos indígenas en cuanto a derechos colectivos. Todavía en el ámbito internacional, más fuertemente en la ONU que en la OEA, muchos países se oponen al reconocimiento del carácter de pueblos a los indígenas y argumentan que el Pacto está dirigido básicamente a la independencia de las antiguas colonias.

Adicional a lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por primera vez en los instrumentos sobre derechos humanos, hace referencia a la condición de minorías étnicas. El Artículo 27 de este Pacto, dispone que:

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

Como se observa, al igual que la Convención contra la Discriminación, el Artículo 27 del Pacto, hace referencia a derechos que se ejercen colectivamente, como son la cultura, la religión y

el idioma. Si se lee en detalle su redacción, puede observarse claramente la pugna entre el carácter individualista presente en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y a la vez una preocupación subyacente por el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas, pues tal Artículo se refiere a las personas que pertenecen a las minorías y sus derechos “en común con los demás miembros de su grupo”.

A este respecto, resulta pertinente invocar una parte del Comentario General realizado por el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, en abril de 1994, en el que se refiere no sólo el carácter de derechos colectivos que contiene este Artículo, sino también la aplicabilidad de los pactos a los pueblos indígenas:

“El disfrute de los derechos a los que se refiere el artículo 27 no menoscaba la soberanía y la integridad territorial de un Estado Parte. No obstante, en algunos de sus aspectos los derechos de las personas amparados en virtud de ese artículo -por ejemplo, el disfrute de una determinada cultura- pueden guardar relación con modos de vida estrechamente asociados al territorio y al uso de sus recursos. Esto podría ser particularmente cierto en el caso de los miembros de comunidades indígenas que constituyen una minoría.” (Art. 3.2)

En cuanto al derecho a la propiedad el PIDESC, reconoce el derecho de los pueblos a la subsistencia y al uso de sus riquezas y recursos naturales: “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Ninguna disposición del Pacto deberá interpretarse en menoscabo de este derecho”. (Arts. 2 y 25).

A partir de la aprobación de los pactos, los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos poco a poco han ido ampliando su espectro con relación a las poblaciones indígenas, y, aunque sin admitir formalmente el carácter de pueblos de estos grupos y que se trata de derechos colectivos, han ido incorporando una serie de derechos individuales y grupales que vienen a configurar un sustrato adicional a los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT.

OTRAS REGULACIONES DEL SISTEMA UNIVERSAL RELACIONADAS CON LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL

Aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1965, fue ratificado por Colombia mediante la Ley 22 de 1981, proclama los derechos a la igualdad y a la no discriminación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y, compromete a los Estados a adoptar medidas especiales y concretas, en las mismas esferas para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de los grupos raciales o las personas pertenecientes a ellos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. (Arts. 1 y 2)

De acuerdo con lo anterior, las medidas especiales que se adopten para proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no vulneran el principio de igualdad sino al contrario, lo ponderan para que la igualdad de derechos sea efectiva tomando en cuenta las diferencias culturales y el déficit a que han sido sometidos históricamente.

Se convirtió en el referente más inmediato de los derechos indígenas, al mostrar un avance en su consideración como grupos, además de las personas individualmente consideradas, pertenecientes a ellos. A pesar de que esta Convención no se aleja del carácter individualista que guía a los demás instrumentos, compromete a los Estados a asegurar la protección de los grupos raciales y, en tal medida, puede considerarse como una base para el reconocimiento futuro de derechos colectivos. Su aplicabilidad a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos ha sido reconocida y reafirmada por la jurisprudencia de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en especial de la Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión para la Prevención de Discriminación y la Protección a Minorías, y el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial, entre otros, que a partir de la década de 1990 abordaron de manera más integral el problema de los pueblos indígenas.

Entre otras recomendaciones, puede citarse la aprobada por el Comité en 1998 en la que luego de reafirmar:

“...que las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial se aplican a las poblaciones indígenas”, exhorta a los Estados Parte a que “reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de vida de las poblaciones indígenas como un factor de enriquecimiento de la identidad cultural del Estado y garanticen su preservación”; “proporcionen a las poblaciones indígenas las condiciones que les permitan un desarrollo económico y social sostenible, compatible con sus características culturales” y “reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales”.

CONVENIO SOBRE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA

Aprobado en 1992 en Río de Janeiro. Por medio de la Ley 165 de 1994 el Congreso de la República de Colombia aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", que regula el uso adecuado y sostenible de los recursos biológicos y genéticos, mediante la participación justa de los pueblos y comunidades indígenas en los beneficios derivados de tales recursos con una transferencia tecnológica apropiada. La Corte Constitucional destaca que uno de los pilares esenciales del desarrollo social es el derecho a un ambiente sano, destacando la importancia de dicho Convenio para Colombia por ser reconocido a nivel mundial como uno de los centros biológicos de mayor diversidad. La Corte también destaca la importancia que tienen sus disposiciones para las comunidades locales e indígenas debido a que sus sistemas de vida tradicional se basan generalmente en el uso de los recursos biológicos. (C.C, Sentencia C-519:1994)

El Convenio reconoce el respeto a la participación de los pueblos indígenas en la conservación y uso de los recursos de la biodiversidad mediante la preservación y mantenimiento del conocimiento y de sus prácticas tradicionales, con arreglo a la legislación nacional. Reconoce, además, la estrecha dependencia de los pueblos indígenas con los recursos biológicos, señalando el derecho al goce de los beneficios derivados del conocimiento y las prácticas tradicionales. (Art. 8(j)) El artículo 10 señala el deber de los Estados Parte en la protección y utilización de los recursos biológicos en consonancia con las prácticas culturales tradicionales, siendo de gran importancia en la supervivencia cultural, dado que enfatiza en la utilización de los recursos de biodiversidad de acuerdo con las prácticas y usos consuetudinarios del desarrollo sostenible, como mecanismo indispensable para la existencia de las culturas indígenas. El intercambio de información también

está contemplado en el Artículo 17 del CDB, comprende el conocimiento indígena y tradicional, y la repatriación de tal información cuando sea viable: “Ese intercambio de información incluirá el intercambio de los resultados de las investigaciones técnicas, científicas y socioeconómicas, así como información sobre programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con las tecnologías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 16”. (Art. 17.2) Finalmente, el artículo 18 trata del impulso de la cooperación con el fin de perfeccionar el uso de tecnologías, aplicando con respeto otras fuentes de conocimiento como las tradicionales e indígenas.

EL CONVENIO 169 DE LA OIT

Este Convenio, ratificado por Colombia en fase previa la aprobación de la Constitución de 1991, mediante la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, puede entenderse como el principal instrumento internacional al regular los derechos mínimos de los pueblos indígenas como sujetos colectivos dentro del Estado. Enuncia una serie de derechos esenciales para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos, como son la acción coordinada en la protección de los derechos de los pueblos y el respeto por su integridad, asegurando el goce del derecho a la igualdad y de oportunidades otorgado por la legislación nacional a los demás miembros de la población, promoviendo el efectivo cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales, respetando su identidad social y cultural, costumbres tradiciones e instituciones (Art. 2) la protección y reconocimiento de sus valores y prácticas sociales y culturales, religiosos y espirituales, (Art. 5) la aplicación de la legislación nacional teniendo en cuenta sus costumbres y el derecho consuetudinario en consonancia con la Jurisdicción Especial Indígena, teniendo en cuenta sus particularidades sociales económicas y culturales, (Arts. 8, 9 y 10) y, el respeto por la

relación que tiene para las culturas y valores espirituales el territorio para el ejercicio colectivo de esa relación, (Art. 13) las garantías el derecho a la educación en igualdad de condiciones teniendo en cuenta sus instituciones, sistema de valores y el respeto por las lenguas indígenas con el fin de promover su práctica y desarrollo lingüístico. (Arts. 26, 27 y 28) Sobre este marco de reconocimiento de los sujetos colectivos, el Convenio 169 en consonancia con la Constitución colombiana, reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas que se pueden agrupar en los tres ejes que marcan las reivindicaciones del movimiento indígena en Colombia en las décadas previas a su aprobación: territorio, cultura y autonomía.

En materia de territorio el Convenio reconoce a los pueblos indígenas los derechos de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan históricamente (Art. 14.1), el derecho a no ser trasladados de ellas, a menos que medie su consentimiento libre e informado, la adopción de medidas de compensación y de indemnización. (Art. 16) Establece también la protección de los recursos naturales en sus territorios y el medio ambiente, exigiendo especial protección a los derechos que sobre los recursos naturales consagra la legislación nacional, y el derecho a participar en su uso, administración y conservación. (Arts. 15.1 y 7.4) En cuanto a la prospección, exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, establece como mecanismo la consulta previa en aquellas decisiones que puedan afectarlos. (Art. 15.2).

El derecho a la autonomía o a la autodeterminación implica el derecho de estos pueblos a decidir sobre los asuntos que les atañen y en especial a decidir sus prioridades de desarrollo y a participar en las decisiones sobre desarrollo en la medida que pueda afectar sus pautas culturales,

sociales, institucionales y territoriales, haciendo obligatoria la consulta de los planes y programas de desarrollo en el nivel nacional y regional que los puedan afectar y ordenando que en ellos, se prioricen acciones dirigidas al mejoramiento de sus condiciones de vida, de salud, de trabajo y de educación. Como parte del derecho a la autonomía, establece además el respeto por el derecho consuetudinario en el ámbito de la legislación nacional, y salvaguarda la conservación de sus costumbres e instituciones propias (Arts. 7 y 8).

Como un mecanismo especial para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en general, y en especial su derecho a la autonomía, establece la consulta previa cada vez que el Estado pretenda adoptar medidas de tipo legislativo o administrativo que les puedan afectar. En esta medida la consulta es un instrumento encaminado a la salvaguarda también de sus derechos territoriales y culturales cuando éstos puedan resultar afectados como resultado de la ejecución de proyectos y programas de desarrollo en sus territorios. Las consultas deben hacerse de buena fe y con el fin de llegar a acuerdos o lograr su consentimiento, por medio de procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas. En tal sentido, la consulta es obligatoria cada vez que se pretendan adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarias, sus derechos o las tierras que ocupan y utilizan para sus actividades tradicionales y de subsistencia, así no cuenten aún con títulos de propiedad ni se encuentren en proceso de titulación. (Arts. 5 y 6)

En concordancia con lo anterior, los procedimientos para la consulta deben reunir los siguientes parámetros: (i) Debe hacerse antes de autorizar o emprender los proyectos, (ii) Debe

hacerse a través de las instituciones representativas de las comunidades, (iii) Debe realizarse por procedimientos apropiados, de acuerdo con las circunstancias de las comunidades, (iv) Debe efectuarse de buena fe, (v) Tiene como finalidad la de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida, (vi) El objeto de la consulta es llegar a acuerdos entre el Gobierno y las comunidades sobre las medidas o proyectos propuestos, (vii) Se debe determinar la participación en beneficios a favor de las comunidades y las indemnizaciones por los daños que puedan sufrir.

Adicionalmente, el Convenio establece que antes de emprender cualquier medida o proyecto de desarrollo, se deben efectuar estudios en cooperación con las comunidades con el fin de determinar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de los proyectos que se pretende ejecutar y que los resultados de los estudios deben considerarse como los criterios fundamentales para la ejecución de los proyectos. (Art. 7.3) Según lo anterior, la consulta debe tener como eje el análisis de impactos específicos sobre los pueblos indígenas de la obra o proyecto que se pretende ejecutar y, consecuentemente, su conveniencia o inconveniencia, siendo necesario admitir que se puede llegar a la conclusión que un determinado proyecto no se debe realizar porque causa daños graves a la integridad de las comunidades, que no son susceptibles de reparación alguna. En caso de aprobarse la obra o proyecto, durante la consulta se deben definir las condiciones para su ejecución, las medidas necesarias para evitar, corregir, mitigar o reparar los daños que pueda ocasionar y definir la participación de las comunidades en los beneficios que genere el proyecto.

Es por esto que se puede sostener sin lugar a equívocos que la consulta es el mecanismo más eficaz para la protección de los derechos indígenas y, al ser el medio para garantizar el ejercicio

de sus derechos a la vida y a la integridad cultural, constituye un derecho fundamental en sí misma. Especialmente ha sido objeto de revisión este mecanismo tratándose de la explotación de recursos naturales no renovables en territorios indígenas, en aplicación directa del párrafo del Artículo 330 de la Constitución Nacional.

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en adelante DNUPI, junto con el Convenio 169 de la OIT, se convierte en los instrumentos internacionales de mayor importancia en cuanto a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. La DNUPI fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007. Colombia fue el único país latinoamericano que se abstuvo de su aprobación, argumentando que la Declaración entrañaba contradicciones con el ordenamiento jurídico nacional y con los poderes del Estado, siendo Colombia, además, uno de los países con un mayor desarrollo y avance en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y por su amplitud en el sistema nacional. No obstante, el 21 de abril del 2009, en el marco de la Conferencia de Examen de Durban el Gobierno colombiano acogió el espíritu de la Declaración, reconociendo su importancia histórica y los valores en los que se basa y, resaltó los esfuerzos de las organizaciones e individuos que participaron en su redacción. Colombia impugnó los artículos relacionados con la no realización de actividades militares en los territorios indígenas, (Art. 30) los mecanismos para la consulta con la obtención del consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar medidas legislativas y administrativas que los afecten, (Art. 19) el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en la elaboración de estrategias para su desarrollo y lo

relacionado con la reparación justa y equitativa con el fin de mitigar los impactos ambientales, sociales, culturales y espirituales derivados de la ejecución de proyectos en sus territorios. (Art. 32)

Con relación a los artículos enunciados se observa que las objeciones del Gobierno dan relevancia a intereses económicos que se contraponen con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en contravención a las normas y estándares del derecho internacional. En efecto, y tal como sucede en la actualidad, el Estado da mayor importancia a la gran minería, a proyectos forestales y a la agroindustria en los territorios indígenas que a la protección efectiva de sus derechos. Esto se verifica en la omisión sucesiva de los procesos de consulta previa que debe obligatoriamente realizar cada vez que se pretenda autorizar un proyecto de esta magnitud que pueda afectar a los pueblos indígenas, al igual que la omitió para establecer los regímenes forestal y agrario e incluso para adoptar el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Es por este motivo que tanto la Ley Forestal y la Ley de Desarrollo Rural, como la aprobatoria del Plan de Desarrollo fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional por no haber sido consultadas con los pueblos indígenas y afrodescendientes, violando el ordenamiento nacional e internacional. En tal circunstancia, el Congreso de la República está en mora de legislar sobre el tema de la consulta previa con el fin de garantizar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Con relación a la DNUPI, la Corte Constitucional de Colombia reconoce que el cuerpo normativo de la DNUPI guarda una amplia relación con el Convenio 169 de la OIT y el ordenamiento constitucional colombiano, lo que perfecciona y fortalece los estándares de sus derechos. Precisa que su espíritu descansa sobre cuatro ejes centrales: (i) principio de no discriminación, porque los pueblos indígenas gozan de iguales derechos al resto de la población y el goce especial de sus derechos asociados a la diversidad étnica, los cuales no deben ser obstáculo

para el ejercicio de los demás derechos humanos; (ii) el derecho a la autodeterminación, como principio fundacional de sus derechos; (iii) la relevancia del principio de no asimilación, considerado el principio fundamental de las comunidades y (iv) el derecho a la participación, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de las medidas que los afecten. (C.C, Sentencia T-376 de 2012)

Una lectura de la DNUPI nos permite observar que la protección de los derechos colectivos de los pueblos allí reconocidos, guardan estrecha relación con los establecidos en el convenio 169 de la OIT y en la Constitución colombiana, pero les da mayor alcance en cuanto al derecho a la autonomía o de libre determinación y el derecho a la consulta previa al erigirlo en consentimiento libre, previo e informado. En cuanto a la libre determinación, la Declaración equipara este derecho con el reconocido en el artículo 1º común a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, resolviendo la ambigüedad que quedaba en este sobre si los pueblos indígenas eran o no beneficiarios del derecho a la libre determinación. Este asunto no había sido dirimido por el Convenio 169 de la OIT y los pueblos indígenas seguían reclamando su derecho de autodeterminación mientras los Estados lo negaban con base en que el Convenio 169 había precisado que se trataba solo de autonomía.

Respecto a la consulta previa, la Declaración es mucho más precisa que el Convenio 169, por tres aspectos fundamentales: el consentimiento libre, previo e informado implica una clara y explícita voluntad de los pueblos indígenas frente a las medidas de que se trate, mientras que la consulta se refiere más al despliegue de actividades por parte de los gobiernos para conocer las opiniones y percepciones de los pueblos indígenas sin comprometer un consenso. Al respecto, la Declaración busca garantizar que los pueblos indígenas efectivamente tomen parte en la decisión

final e incluso abarca su derecho a negarse a aquellas iniciativas administrativas o legislativas que los afecten de manera directa.

Sobre el carácter vinculante u obligatorio de la Declaración para los Estados, cabe aclarar que en el Manual Básico de Naciones Unidas se explica que:

“[...] en el contexto del Derecho Internacional, la Declaración no es un documento vinculante para los Estados al no ser un Tratado Internacional. Posee el rango de Declaración, lo cual le confiere un valor político, ético y moral importante para todos los países miembros de las Naciones Unidas, pero no genera obligaciones jurídicas directas”. (CONAIE, 2010:4).

Sin embargo, la propia Declaración, en su artículo 38 exhorta a los Estados a adoptar las medidas apropiadas, incluyendo las legislativas, para darle aplicación a su contenido, es decir, que la legislación nacional de los estados debe ser adecuada con el fin de que integre el espíritu y las normas de la Declaración para, de ese modo, hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas.

No obstante, la ausencia de carácter vinculante, para el caso colombiano, sí se puede referir su obligatoriedad dados los principios constitucionales referidos a propósito del Bloque de Constitucionalidad, especialmente el contenido en el artículo 9º sobre el reconocimiento y pleno respeto por los principios del derecho internacional aceptados por Colombia como base del ordenamiento jurídico nacional. En tal dimensión, la Corte Constitucional, como máximo tribunal de los derechos fundamentales, en su jurisprudencia reciente ha incorporado como vinculantes los principios reconocidos en la Declaración.

EL SISTEMA INTERAMERICANO FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Sistema Interamericano no ha desarrollado normas específicas sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero éstos encuentran un sustrato básico en los principios de la igualdad y no discriminación. Una lectura sobre el Sistema Interamericano frente a los derechos de los pueblos indígenas debe centrarse en lo consagrado en la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, y el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que aún no se ha aprobado.

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

El sistema internacional de protección de los derechos humanos es relativamente reciente, si se toma en cuenta que su desarrollo se inicia en 1948 con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre por la Organización de Estados Americanos (OEA), y, en el mismo año, la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Si bien las Declaraciones en sí mismas no tienen fuerza jurídica vinculante, se constituyen en un catálogo de principios aceptados universalmente, y se traducen en un compromiso político de los Estados miembros de las respectivas organizaciones.

Ambos instrumentos marcan la pauta de los desarrollos futuros en cuanto a la conceptualización de los Derechos Humanos y a las obligaciones específicas de los Estados para su protección. Una característica común en éstos y en los posteriores instrumentos del Derechos Humanos, tanto del sistema de Naciones Unidas como de la Organización Americana, es el sesgo eminentemente individualista, que le valen la mayor parte de las críticas especialmente provenientes de sociedades donde el carácter colectivo prima sobre los individuos, como son los pueblos indígenas. No obstante, lo anterior, la mayoría de los instrumentos establecen derechos en consideración al carácter étnico, para lo cual, quíerose o no, hay que concurrir a una visión colectiva.

De ambas declaraciones es pertinente destacar un sustrato esencial para los derechos de los pueblos indígenas: el derecho a la igualdad. Tanto la Declaración Universal como la Carta de la OEA y la Declaración Americana, establecen el principio de la igualdad, según el cual todas las personas nacen libres y son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección y a iguales oportunidades, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, credo, origen nacional o social, o cualquier otra condición. (Declaración Universal Arts. 1, 2 y 7; Carta de la OEA, Art. 3; Declaración Americana, Art. 2; Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 24)

De acuerdo con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el derecho al desarrollo es un derecho universal e inalienable y como tal, integrante de los derechos humanos fundamentales, y la falta de desarrollo no puede invocarse como justificación para limitar los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El derecho al desarrollo está concebido como la obligación de los Estados de promover un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que permita y contribuya a la plena realización de la persona

humana. Bajo los principios de solidaridad y cooperación, los Estados se comprometen a aunar esfuerzos para lograr la justicia social internacional en y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, el cual abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. (Carta de la Organización de los Estados Americanos (Arts. 30, 31, 33, 34 y 38)

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Denominada también como Pacto de San José, en adelante CADH, promulgada el 22 de noviembre de 1969, incorporada al ordenamiento interno colombiano mediante la Ley 16 de 1972. Nace como un compromiso de los Estados Parte de la Convención en el respeto por los derechos y libertades fundamentales, sin discriminación por cuestiones de raza, nacionalidad, creencias, sexo, religión, posición económica u otra condición social. Ordena articular al ordenamiento interno y constitucional las respectivas medidas legislativas para el cabal cumplimiento de los derechos y libertades de la persona. (Arts. 1 y 2)

Al analizar la CADH se identifican en su contenido el compendio de derechos civiles y políticos, mas no se re distinguen allí los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La CADH parte del reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida y la integridad personal. Respetuosa de los derechos de la persona humana, aboga por la prohibición de todas las formas de esclavitud y servidumbre, propugnando por el derecho a la libertad personal. Los derechos civiles y políticos son considerados como derechos de primera generación y articulan los principios de dignidad, libertad y participación política democrática.

Todos los instrumentos de Derechos Humanos deben ser interpretados con fundamento en el derecho a la igualdad, según el cual todos los seres humanos nacen libres e iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección, sin distinción de raza, sexo, religión, origen nacional o cualquier otro (CADH, Art. 24) El derecho a la vida y la integridad personal, están establecidos como un derecho individual, partiendo del respeto y su protección por la ley y no ser privado de ella arbitrariamente. (Arts. 4 y 5) Se extiende como derecho de los pueblos indígenas, traducido en su derecho a existir como sujetos colectivos con culturas propias; es decir, a seguir siendo como son, a tener idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales y económicas propias, diferentes del conjunto de la población nacional.

El derecho de propiedad está protegido por los instrumentos generales de derechos humanos, en la CADH, La protección que brindan estos instrumentos a la propiedad individual y colectiva, incluye el derecho de libre disposición de las riquezas y el derecho a no ser privado de ella, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. En especial para los pueblos indígenas, está establecido el deber de los Estados de proteger su patrimonio y garantizarles la propiedad sobre sus tierras, de la siguiente manera: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley” (CADH, Art. 21). La CADH fue complementada con el Protocolo de San Salvador, dado que sólo aludía a los derechos civiles y políticos, adicionándose para el efecto los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue suscrito por los países parte el 18 de noviembre de 1988.

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016. Esta propuesta surgió en 1989 por mandato de la Organización de Estados Americanos, encomendando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la preparación de un instrumento jurídico relativo a los derechos de los pueblos indígenas. En su preámbulo el proyecto de declaración alude sobre la trascendencia histórica sobre los derechos de los pueblos indígenas en las Américas, como también derecho a la identidad y la diversidad basados en los principios de la democracia que se hayan inscritos en las constituciones de los Estados en los sistemas de participación, decisión y autoridad. (CIDH, 1997) Define al mismo tiempo, la autoidentificación como el criterio fundante para el reconocimiento de los pueblos en dicha declaración. Respecto a la realización de actividades militares en territorios indígenas, en el Artículo XXX, numeral 5 donde manifiesta que: “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado”.

**SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA SEGÚN EL
INFORME DE PARTE DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS DE
PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE FEBRERO DE 2019 :**

Hace un acercamiento al país respecto a la democracia, la seguridad, el desarrollo, la participación cívica y la paz, de cara a la implementación del acuerdo de paz pactado entre el gobierno y el Grupo Armado Revolucionario (FARC).

La firma del acuerdo de paz en Colombia fue un evento de gran importancia en los distintos panoramas del país y plantea un porvenir de superación de una de las guerras más complejas y largas en Colombia. El acuerdo propone una paz estable y duradera, sin embargo, pero para que eso sea cumplido es indispensable la presencia de distintos organismos que garanticen el respeto por los derechos humanos como la vía para sostener la paz. Es importante reconocer el compromiso que demanda responder a las exigencias que un acuerdo de ese tipo requiere, ya que, al ser un conflicto bilateral, no sólo debe haber disposición de parte del grupo revolucionario sino también, un compromiso del estado para reconocer su responsabilidad y actuar de manera acertada y responsable. Para esto, es indispensable velar por la protección de los derechos humanos de todas las poblaciones involucradas, garantizando que haya igualdad de derechos y un acceso seguro a la democracia. Igualmente deben establecerse estrategias preventivas que disminuyan los índices de violencia de toda índole.

La prevención debe ser el enfoque del gobierno para atacar las causas del conflicto. Una posición preventiva significaría a corto y largo plazo una disminución en los costos de la guerra,

tanto económicos como humanos, pero, se ha evidenciado que en Colombia se ha aumentado paulatinamente el presupuesto para la defensa, descuidando en los planes de desarrollo a distintas poblaciones que requieren de la presencia efectiva del gobierno no sólo por medio de las fuerzas militares sino también por medio de una presencia integral que tenga claras las necesidades prioritarias de las personas, tales como el acceso a la educación, a la salud, a condiciones dignas de vivienda, entre otras.

Por otro lado, uno de los aspectos principales de una negociación es la oportunidad de escuchar voces diversas que defiendan sus derechos y busquen la manera de darle reconocimiento a distintas culturas, etnias, posiciones filosóficas e ideológicas antes silenciadas. En este contexto emergen los líderes sociales como la esperanza de que muchas minorías logren ser representadas ante el gobierno y de esta manera mejorar sus condiciones sociales. La misión del estado es proteger los derechos fundamentales de estos líderes y mostrarse receptivos frente a sus necesidades. No obstante, luego de la firma del acuerdo de paz se ha elevado la cifra de asesinatos y amenazas a líderes sociales sin que el gobierno pueda poner límite a la situación por medio de un plan de acción oportuno. Esto constituye una violación grave a los derechos humanos y pone en cuestión la disposición preventiva del gobierno frente a la violencia, ya que esto trae como consecuencia niveles endémicos de conflicto a consecuencia de la desaparición de estos agentes de cambio que preservan la democracia y les dan visibilidad a las poblaciones marginadas históricamente, no sólo por el conflicto armado sino también por la ineficiencia del estado en cuanto a cobertura a nivel nacional.

El fortalecimiento de la democracia es otra de las apuestas que trae el acuerdo de paz y que se ha favorecido en la medida en que ha disminuido la violencia en los procesos electorales. Sin

embargo, sigue habiendo dificultades para que poblaciones alejadas puedan ejercer su derecho al voto, esto pone en evidencia que la problemática no sólo es la inseguridad la que hacía que muchas personas no votaran, sino que hay presencia de un tema de responsabilidad del gobierno para hacer llegar a todas las comunidades alejadas los distintos mecanismos de participación ciudadana. Esta apuesta por la democracia no solamente implica el derecho al voto, sino también la participación en la política de algunos líderes de las FARC con el fin de cambiar el escenario de confrontación, se cambia el uso de las armas por el uso del diálogo para asentar las distintas posiciones ideológicas. A pesar de que en el pacto se encuentra una clara disposición del gobierno para facilitar estas participaciones como un acto fundamental en la implementación del acuerdo, ha sido manifiesto un descontento y un desacuerdo con la apertura de los espacios políticos a estas personas de parte del gobierno actual.

La justicia es uno de los pilares en los que se asienta el acuerdo y es un derecho fundamental que debe ser protegido dándoles prioridad a las víctimas, para esto se ha establecido la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Para efectuar estos mecanismos de la mejor manera no sólo es necesario enjuiciar a los guerrilleros sino también poner la guerra en perspectiva de manera que se pueda evidenciar las distintas responsabilidades que pueda tener el gobierno y posibilitar una aplicación amplia de la justicia así como garantizar la no repetición de los distintos crímenes, como, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales de las que se tienen pruebas, pero aún gran parte de los autores permanecen en la impunidad.

A medida que el protagonismo de la guerra empieza a desaparecer del panorama nacional, otras problemáticas se hacen más evidentes como la corrupción, que impacta en la posibilidad de uso de recursos destinados a la implementación de políticas que ataquen la desigualdad y

financiación de proyectos para el mejoramiento de las condiciones de los más necesitados. En este sentido, se puede afirmar que la corrupción deteriora la intención de protección de los Derechos Humanos.

Por medio de este análisis, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reitera su compromiso para trabajar activamente con el estado con el fin de asesorar y participar en las distintas decisiones que dirijan al país a un buen cumplimiento del acuerdo de paz con un enfoque en Derechos Humanos, como garantía del establecimiento de unas condiciones dignas e incluyentes en todo el país y así abonar el terreno idóneo donde pueda construirse una sociedad pacífica.

1. Migraciones indígenas a la ciudad: el caso de los Emberá-katío en Bogotá

1.1. Antecedentes

Durante las últimas décadas se han venido dando al interior de las ciudades del país, y en especial en la ciudad de Bogotá procesos en la movilidad por parte de los indígenas. Unos lo hacen dentro del contexto de la guerra y por las dinámicas que ha originado el desplazamiento forzado en Colombia; otros lo hacen con el fin de mejorar sus condiciones de vida como el empleo, la salud, la vivienda y educación. Mientras que un tercer grupo encontramos a los indígenas originarios de la ciudad como son los Muisca ubicados en las localidades de Bosa y Suba quienes permanecen mimetizados bajo las formas culturales de comunidades mestizas y campesinas que ocupaban los antiguos Resguardos de Bosa y en El Cerro de Suba (Molina, 2007)

Como resultado de la coyuntura política que vive el país, ha hecho que las ciudades sean el epicentro de llegada de miles de migrantes en la búsqueda de oportunidades y el acceso a derechos, como en otros casos, usar el espacio de una ciudad como refugio de la violencia y el conflicto armado que vive el país. La migración de los pueblos indígenas de campo a la ciudad no es sólo del orden nacional, sino también de las zonas de frontera, como el pueblo Kichwa que lleva más de 50 años en esta dinámica, tomando como punto de referencia para sus actividades comerciales

las ciudades de Bogotá y Medellín, proceden de la provincia de Imbabura en la República de Ecuador, cuya actividad económica depende de la labor artesanal de tejidos y de la música tradicional ecuatoriana. Son comunidades que han consolidado redes sociales y comerciales, lo que convierte a las ciudades en lugares dinámicos y complejos para su permanencia y desarrollo como personas. La dinámica de las migraciones a la ciudad por parte de los indígenas mostraba hasta hace unos años en el caso de la ciudad de Bogotá, que había representantes de 47 pueblos indígenas. Haciendo una lectura del censo de 2005, encontramos no solo un fuerte aumento en su total de población indígena sino en el número de pueblos que asciende a 94 de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE, 2005). Bogotá ofrece nuevas dinámicas y marcos de referencia en el desarrollo de la identidad, así como la posibilidad del acceso a la salud, la vivienda, el empleo, el desarrollo de actividades económicas y la economía informal.

Casos de extrema miseria son los enunciados en Bogotá, Medellín, Pereira, donde los indígenas Emberá procedentes del Alto Andágueda y del Eje Cafetero, en medio de la dinámica del desplazamiento por la violencia se han convertido en mendigos temporales de estas ciudades, caso que se encuentra tipificado en varios estudios que se han realizado en torno a esta problemática tan compleja para los organismos estatales y de derechos humanos del país¹.

¹ La Fundación Vía Plural, documentó este caso en el año de 2010 mediante una caracterización a las familias Emberá residentes en la ciudad de Bogotá. Vía Plural. 2009. Informe Identificación y caracterización socioeconómica y cultural del Observatorio de la situación de los niños y niñas de las familias Emberá en Bogotá. En el año de 2005 la

Una nueva arista del conflicto es la resultante del fenómeno de la violencia política contra los pueblos indígenas. Como consecuencia del desarraigo territorial y cultural vivido por los pueblos indígenas se hace necesario la adopción de políticas claras y coherentes acordes con el modo de vida de los grupos étnicos; sumado a ello, se debe analizar los procesos de resistencia en los cuales el despojo es uno de los alicientes ante la precariedad de las políticas estatales en la protección, promoción de sus derechos económicos, sociales y culturales y al amparo de sus derechos colectivos y, finalmente, la necesidad de consolidar en las distintas fuentes y bases de datos información pertinente, veraz y actualizada respecto a la situación real del disfrute y goce efectivo de sus derechos.

Caso sentencia 007

Desde este ámbito la precariedad de las políticas encaminadas a la defensa de los derechos humanos de la población indígena desplazada en los centros urbanos, muestra también que tampoco es un hecho relativamente nuevo: ciertas dinámicas históricas de orden social, organizativo y político los han llevado en algunos casos a la búsqueda de oportunidades, el acceso a derechos como la salud, la vivienda y la educación; mientras que en otro orden encontramos desplazados de sus territorios por causa de una violencia estructural y política, como consecuencia de lo esta situación de vulneración y no tienen otro punto de fuga o de escape que migrar a los

Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó el informe: “Aspectos para tener en cuenta en la construcción colectiva de una política distrital de atención diferencial a la población indígena que se encuentra desplazada en la ciudad, a propósito del caso Emberá-Katio”.

centros urbanos del país. Este tránsito del campo hacia la ciudad se traduce en una nueva colonización urbana donde la ciudad es el epicentro y receptora de la población indígena desplazada.

1.2. Quiénes son y dónde viven los indígenas en Bogotá

Bogotá la ciudad capital es una mega ciudad multicultural en ella encontramos indígenas pertenecientes a los distintos pueblos que conforman la diversidad étnica de la Nación colombiana, no todos los indígenas que viven en la Bogotá son desplazados por el conflicto armado, existen otros orígenes distintos para el poblamiento indígena en la ciudad. “Los indígenas ciudadanos en el contexto de Bogotá se encuentran clasificados en tres categorías: originarios, migrantes y desplazados”. (Molina, 2007, p. 105).

- *Originarios*: Están ubicados en las veredas San José y San Bernardino de Bosa y en el Cerro de Suba, sus raíces están en Bogotá han sufrido una transición entre lo rural y lo urbano.
- *Migrantes*: son aquellos que se han trasladado a la ciudad buscando mejores condiciones de vida entre ellos están las etnias Kichua, Inga, Wayuu, Guambiano, Nasa, Uitoto, Cofán, que se caracterizan por ser artesanos y comerciantes de la ciudad.
- *Desplazados* son aquellos indígenas que han llegado huyendo de la violencia del conflicto armado se cuentan entre ellos los Emberá-katío del Chocó, los Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y los Pijaos del Tolima.

Según el censo de 2005 en Bogotá residen 15.032 indígenas 7.288 de ellos desplazados por la violencia, la gran mayoría de la población indígenas se ubican en las localidades de Suba, Bosa, Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme.

TABLA 1 DISTRIBUCION POR LOCALIDADES DE LA POBLACION INDIGENA EN BOGOTA

LOCALIDAD	POBLACION INDIGENA	PORCENTAJE
SUBA	3.509	23%
BOSA	1.941	13%
ENGATIVA	1.505	10%
KENNEDY	936	6%
CIUDAD BOLIVAR	889	6%
USME	723	5%
RAFAEL URIBE	711	5%
SANTAFE	706	5%
USAQUEN	656	4%
FONTIBON	576	4%
LOS MARTIRES	484	3%
SAN CRISTOBAL	382	3%
TEUSAQUILLO	373	2%
TUNJUELITO	370	2%
BARRIOS UNIDOS	295	2%
CHAPINERO	292	2%
LA CANDELARIA	284	2%
ANTONIO NARIÑO	213	1%
PUENTE ARANDA	186	1%
SUMAPAZ	1	0%
TOTAL	15.032	100%

Fuente: Censo general 2005 – DANE – Colombia. Elaboración propia

1.3. Papel de los indígenas en la economía de la ciudad

Los indígenas en la ciudad se ven obligados a ocuparse en distintas actividades como la artesanía y el comercio en economía informal, ante la falta de formación y educación por parte de ellos, se ven obligados a trabajar en el sector de la construcción, y en caso de las mujeres como empleadas del servicio doméstico. Las prácticas chamánicas, el curanderismo, la medicina tradicional corresponden al pueblo Inga por sus dinámicas históricas al interior de los centros comerciales de las ciudades del país. Los ingas y kamsá del Valle del Sibundoy quienes durante las últimas décadas “se extienden prácticamente a todas las ciudades importantes de Colombia. Inician contactos con comunidades indígenas con las cuales intercambian plantas y conocimientos ceremoniales”. (Molina, 2007: 109).

Molina citando a Garay y Pinzón manifiesta que:

“[...] Su proclividad al nomadismo, su fácil adaptación a los cambios sociales y a las ecologías más difíciles, los convierte en el paradigma de enlace de las redes de curanderos. Tres mil quinientos curanderos clasificados por ellos mismos en setenta clases de poderes diferentes, conforman el mosaico de prácticas urbanas más elaborado de Colombia. Sin embargo, no hay una sola iglesia que conjugue a todas estas diversas prácticas. En este sentido se puede decir que antes que buscar una totalización, estas culturas populares operan con arreglo a la ley de la diferencia. En su encuentro no se formalizan. Los inganos se extendieron a Panamá, a Venezuela, al Ecuador, pero no en un solo sentido, sino que crearon asentamientos en distintas ciudades, entroncándose con las redes locales y manteniendo sus propios hilos de la red”. (Molina, 2007, p. 105).

Los Kichwa la música, los tejidos artesanales son su medio de subsistencia tienen la característica de ser grandes comerciantes y artesanos. Practican y subsisten de una actividad que se mantiene en el tiempo, arraigándose en el entorno de la ciudad y sus habitantes (Molina, 2007).

El grupo Emberá-Katio, caso especial en el que se centra esta investigación encontramos que su proceso migratorio del campo a la ciudad, los ha llevado a vivir como mendigos en un medio hostil a sus prácticas y creencias culturales, cambios radicales de su forma de vida. Mientras el hombre se dedica a los quehaceres del hogar, la mujer deambula por las calles con sus pequeños hijos, elaborando artesanías manuales, ante la mirada indiferente de los transeúntes que cruzan a diario las calles de la ciudad capital del país, habitan pagadiarios de los barrios La Favorita y Los Mártires. Hoy en el contexto de la política de retorno, existen 48 familias se encuentran en el alojamiento destinado para ellos por parte de la Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas ubicado en el centro de Bogotá en la calle 18 y carrera 14.

1.4. La población indígena en Colombia frente a la cifras de los sistemas de información:

TABLA 2 CIFRAS COMPARADAS CENSO 1993 VS 2005

CENSO	POBLACION INDIGENA	CONCENTRACION EN CASCOS URBANOS	PORCENTAJE
1993	532.233	60.188	11%
2005	1.392.623	298.219	21%

Fuente: Censo – DANE – Colombia. Elaboración propia

Comparando las cifras poblacionales de los pueblos indígenas, del censo de 1993 y el censo de 2005, aparece un registro de 523.233 y 1.392.623 indígenas respectivamente refleja un aumento del 262%. La variable queda cuenta de la población indígena concentrada en los cascos urbanos del país, refleja 60.188 indígenas urbanos para el año 1993, el censo 2005 reporta un total de 298.219, se advierte un incremento de 495%. – Ver anexo 1-, el censo de 1993 registro 1.298 indígenas habitando la capital y el censo de 2005 se registraron 15.032 indígenas se en Bogota, es decir, el crecimiento de la población fue muy alto, pasó de tener representantes de 47 pueblos indígenas a un total de 94.

En el Registro Único para la Población Desplazada a febrero 28 de 2011 registra 92.269 indígenas en la modalidad de desplazamiento, de los cuales 39.131 se encuentran en las ciudades capitales del país, es decir un equivalente al 42.4% del total nacional de población indígena desplazada.

TABLA 3 POBLACION INDIGENA DESPLAZADA POR CIUDADES

CIUDAD	POBLACION INDIGENA DESPLAZADA
BOGOTA	7.288
INIRIDA	3.733
VALLEDUPAR	3.335
CALI	2.656
MOCOA	2.600
POPAYAN	2.128
PEREIRA	2.097
RIOHACHA	1.705
PASTO	1.481
MITU	1.348
FLORENCIA	1.275
CUCUTA	1.064
SANTA MARTA	963
SAN JOSE DEL GUAVIARE	871
VILLAVICENCIO	800
MEDELLIN	800
CARTAGENA	763
SINCELEJO	751
NEIVA	586
QUIBDO	573
IBAGUE	480
ARMENIA	359
BARRANQUILLA	286
PUERTO CARREÑO	260
MONTERIA	251
ARAUCA	177
LETICIA	144
YOPAL	129
MANIZALEZ	127

Fuente: Acción Social -Registro Único para la Población Desplazada 2011 – Colombia. Elaboración propia

Bogotá es la principal ciudad receptora de la población desplazada en el país, con 7.288 está radicado el 18.6% de la población indígena desplazada. En segundo y tercer lugar siguen consecutivamente las ciudades de Inírida y Valledupar con 3.733 y 3.335 respectivamente. La realidad de las migraciones de los pueblos indígenas de lo rural a lo urbano, según los datos reportados por los sistemas de información refleja un aumento del traslado hacia los cascos urbanos de Colombia. – Ver anexo 2-.

Bogotá es la ciudad con mayor recepción de población indígena desplazada como se observa en la gráfica 1. Esta situación obliga a que el Distrito Capital cuente con estrategias para atender las necesidades de esta población y para ello definió la política pública en el Acuerdo 359 de 2009.

Fuente: Acción Social -Registro Único para la Población Desplazada 2011 – Colombia. Elaboración propia

1.5. Cabildos Indígenas urbanos

Bogotá es una de las ciudades del país que mayor reconocimiento ha dado a los Cabildos indígenas urbanos, esta política de reconocimiento de la diversidad cultural ha tenido avances como pasar de cinco cabildos legalmente reconocidos: Muisca de Bosa y Suba, Ambiká, Pijao, Kichwa

e Inga de un total de catorce: Cabildo Indígena Inga, Cabildo Indígena Muisca de Suba, Cabildo Indígena de Bosa, Cabildo Indígena Kichua, Cabildo Indígena Ambiká Pijao, Cabildo Indígena Yanacona, Cabildo Indígena Nasa, Cabildo Indígena Pasto, Cabildo Indígena Uitoto, Cabildo Indígena Misak, Cabildo Indígena Emberá, Cabildo Indígena Emberá Chamí, Cabildo Indígena Emberá Katío, Cabildo Indígena Emberá Wounaan. (Plan de Acción Cultura 2015-2020 para los pueblos indígenas en Bogotá).

Dentro de las políticas del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del Distrito, ha sido proteger la figura de los Cabildos Indígenas urbanos de la ciudad. Desde este ámbito los acuerdos y políticas encaminadas a la protección de la vida y los derechos de la población indígena desplazada en los centros urbanos, no es un hecho relativamente nuevo, la realidad es que son dinámicas históricas de orden social, organizativo y político, las cuales los han llevado a buscar refugio en la ciudad, por causa de una violencia estructural como consecuencia del conflicto armado interno y no tienen otro punto de escape que migrar a los centros urbanos del país. Este tránsito del campo hacia la ciudad se traduce en una nueva colonización urbana, donde Bogotá es el epicentro y la mayor receptora de la población indígena desplazada.

EL ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS:

La declaración de los derechos humanos en su artículo 28 indica ‘‘Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos’’, esto significa que debe haber un compromiso primordial de parte de los estados y de la comunidad internacional para proporcionar a todas las personas espacios sociales y políticos donde puedan ejercer completamente sus derechos.

A pesar de que Bogotá ha tomado algunas medidas para generar un cambio social que permita un desarrollo justo para todos los seres humanos, esto no ha sido suficiente, ya que problemas como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades hacen parte de la cotidianidad en gran parte de los ciudadanos.

En este contexto emerge la necesidad de estructurar un enfoque basado en los derechos humanos, asumiendo como objetivo la plena realización de los derechos de todos los ciudadanos.

Aunque este enfoque podría parecer poco novedoso dado que hay muchas instituciones que se encuentran ya trabajando por objetivos similares, en realidad constituye un cambio importante en la manera de concebir los distintos roles de los actores que participan en las intervenciones de cooperación, con el fin de que sea fundamentado en la realidad práctica del país.

En su estructuración se distingue entre titulares de derecho que son todos los seres humanos, titulares de obligaciones que son las instituciones del Estado y la comunidad internacional, y los

titulares de responsabilidades, que son otros actores sociales como la familia, la comunidad y las organizaciones sociales.

En relación con los titulares de derechos, este enfoque va dirigido a poblaciones marginadas que además de tener necesidades ignoradas por el gobierno, tampoco tienen oportunidad de hacer oír su voz. Por otra parte, frente a los titulares de obligación, es importante exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades, como el respeto y protección de los derechos humanos, de manera extendida a todas las poblaciones sin hacer ningún tipo de discriminación, elevando la dignidad humana a un plano superior. Dejando a un lado las diferencias étnicas, sociales, económicas, ideológicas y culturales.

Los titulares de responsabilidades cumplen con un papel importante en tanto se encuentran en una posición mediadora, fortaleciendo las capacidades de los titulares de derechos para formular sus pretensiones. Asimismo, son un apoyo para el cumplimiento de los deberes de los titulares de obligaciones, pues los Estados no pueden cumplir con sus tareas relacionadas con los derechos humanos, sin el apoyo y la participación de los demás miembros de la sociedad.

Aunque es importante el reconocimiento de las necesidades de los más vulnerables para saber cómo actuar, es también importante crear ambientes promotores de desarrollo sostenible, donde haya un empoderamiento de las personas para hacer uso de sus capacidades, fortalecerlas y ejercerlas en beneficio propio y de la comunidad. Generando de esa manera un paradigma de cooperación y responsabilidad ciudadana amparado por el estado.

Este enfoque se diferencia de otros que, aunque también propenden por la búsqueda de soluciones a distintos problemas como la pobreza y la desigualdad, no hay un interés en incentivar

a las personas para cultivar su autonomía. En cambio, en esta propuesta hay una intención de proporcionar a los sujetos distintas herramientas para hacer valer sus derechos por medio de un desarrollo personal.

Como uno de los principios fundamentales de los derechos humanos es la participación, es indispensable incluir los titulares de derecho en las decisiones del gobierno, de manera que se fortalezca la democracia y a su vez estos actores tengan un mayor conocimiento de la manera cómo operan las instituciones del estado, las cuales deben ser transparentes y abiertas a que los ciudadanos puedan conocer y participar en cómo se gestionan tanto las políticas públicas como los presupuestos.

Brindar las herramientas suficientes para que las personas puedan tomar decisiones sobre su propio desarrollo y donde haya respeto por los derechos humanos de manera integral, es uno de los principales objetivos de este enfoque. Pero también hay que estar conscientes de los retos que hay por delante y de que a estos efectos no existen recetas únicas, considerando cierto tipo de flexibilidad en la implementación, asumiendo quien se encargue de su aplicación, se enfrenta a la variabilidad propia del ser humano, a su carácter subjetivo.

1.6. Políticas públicas para indígenas urbanos

En el caso de Bogotá se tiene concertada y formulada una política pública para los indígenas de la ciudad y un Plan de Acciones afirmativas, en el Acuerdo 359 de Enero 5 de 2009, desde el

gobierno Distrital se atiende desde un enfoque diferencial enfoque étnico y teniendo en cuenta la dimensión de la salvaguardia y protección de la integridad física y cultural de los pueblos originarios al amparo de lo consagrado en la Sentencia T 025 de 2004 y del Auto No. 004 de 2009 emanado de la Corte Constitucional de Colombia. Este documento es una síntesis del proceso de avance en la implementación de la política pública en la ciudad de Bogotá, tomando como base de estudio, el grupo de 48 familias Embera-Katio residentes en el alojamiento de la Caracas con calle 18 en el centro de Bogotá.

El Acuerdo 359 de 2009 establece los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. define Acciones afirmativas como:

“[...] políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que las afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo sub-representado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).

En tanto que la Corte Constitucional, en su Sentencia C-371 de 2000 consideró que:

“[...]con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, o lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”.

Los ejes que fundamentan los lineamientos de la política pública según el Acuerdo 359 de enero 5 de 2009 son:

- Fortalecimiento de la identidad cultural y ejercicio de derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Capital y mejoramiento de sus condiciones de vida.
- Garantía de atención oportuna e integral, con enfoque diferencial, a la población indígena en situación de desplazamiento forzado por la violencia, en responsabilidad compartida con el gobierno nacional.
- Promoción de relaciones de entendimiento intercultural entre los indígenas y el conjunto de la población bogotana.
- Promoción de Bogotá, D.C. como ciudad multiétnica e intercultural, incluyente de todos los grupos culturales y sociales con identidades indígenas particulares. Una ciudad solidaria y respetuosa de la diversidad.
- Erradicación de prejuicios, estereotipos y prácticas sociales y simbólicas de discriminación e inequidad hacia los indígenas, por razón de su etnicidad.
- Reconocimiento y apoyo a las iniciativas de los pueblos indígenas, relacionadas con la acción política no violenta, la resistencia civil y la solución política al conflicto armado.
- Promoción de relaciones de corresponsabilidad social, transparencia y confianza entre el Distrito Capital y las autoridades y organizaciones indígenas.
- Garantías para el funcionamiento de los cabildos indígenas, en su calidad de entidades públicas de carácter especial que cumplen funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales en sus asuntos comunitarios. (Acuerdo 359 de enero 5 de 2009)

Los nueve pilares para su desarrollo son:

1. Gobierno propio y autonomía
2. Identidad
3. Educación intercultural
4. Seguridad económica
5. Participación y consulta previa
6. Salud y medicina tradicional
7. Protección y desarrollo integral
8. Territorio
9. Soberanía alimentaria

Se espera que cada nueva Administración asuma la estrategia de monitoreo, evaluación y actualización, de la política pública que permita la construcción de nuevas Acciones Afirmativas hasta lograr el nivel de equidad deseable orientado por dicha política (Alcaldía de Bogotá, 2011).

Pallares (1988), citando a Peters, define las políticas públicas como: *“el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”*. Pallares señala que a esta definición genérica de políticas públicas hay que agregarle algunas consideraciones, tales como:

- “1. Las políticas públicas deben ser consideradas como un “proceso decisional”. Es decir, por un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Estas decisiones normalmente tienen una secuencia racional.*
- 2. Los casos de*

“inacción”. Una política puede consistir también en lo que no se está haciendo. 3. Para que una política pueda ser considerada como pública tiene que haber sido “generada, o al menos procesada hasta cierto punto, en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales” (p. 141).

En Bogotá se adelantan programas para la implementación de la política pública con grupos étnicos en inversión social y económica a fin de garantizar el goce efectivo de los derechos de la población indígena en Bogotá. Es importante que la ciudadanía capitalina se concientice de la existencia de la diversidad étnica que habita la ciudad, es requisito para construcción de una ciudad intercultural, y lograr que se termine aspectos de inequidad y vulnerabilidad.

“Toda política urbana debe estar dirigida a cerrar la brecha social, y por lo tanto debe considerar la relación de la ciudad con el territorio que la rodea como un componente prioritario: hay una dependencia mutua en los aspectos políticos, económicos-sociales y ambientales entre la ciudad y el campo” (PNUD, 2005).

La política es un proceso en construcción, en la creación de ciudad es necesario que la población indígena participe desde su conocimiento y su cultura, se necesitan espacios de participación para establecer un marco de negociación con el Estado. Los indígenas se tienen que adaptar a la vida en la ciudad y terminan cambiando sus costumbres. Como lo resalta Sánchez: “Muchos de estos individuos y grupos que viven en las ciudades tuvieron que camuflarse para tener una opción de vida frente al estigma social que representaba el ser indígena. Debieron desdibujar la imagen que los identificaba como indígenas; es decir, desecharon su vestido y su religión y

subutilizaron la infraestructura de su propio sistema de derecho y de organización social”.
(Sánchez, 2004)

Como conclusión podemos ver que siendo Bogotá la ciudad que recibe el mayor número de población indígena desplazada, cuenta con política pública para su atención, el Distrito Capital implementa programas sociales en salud, educación con enfoque étnico. La Constitución Política consagra el principio de multiculturalidad: somos diversas culturas, distintos pueblos, la Bogotá postmoderna ha de ser una metrópoli accesible a las diferentes formas de expresión, la ciudad del futuro ha de ser incluyente y participativa, y partiendo del principio de la equidad.

En el siguiente capítulo se ocupa del pueblo Emberá su historia, costumbres y la influencia de la violencia en su traslado de lo rural a lo urbano, asimismo se contextualiza de manera más amplia el fenómeno del desplazamiento forzado a la ciudad de Bogotá y su realidad como víctima de violación de los Derechos Humanos.

2. Pueblo Emberá

2.1. ¿Quiénes son los Emberá?

El término Emberá usado desde los inicios de la conquista en su idioma significa “*gente*”, esta etnia se encuentra hoy en diversas regiones del occidente colombiano por su esquema de establecimiento disperso, pero buscando siempre lugares de características equivalentes, es decir la selva tropical húmeda que es su hábitat natural, los encontramos ubicados en los departamentos de Chocó, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño, y en países como Panamá y Ecuador (Ulloa, 2004, p.95).

Los Emberá reciben diferentes nombres según el lugar donde se encuentren son llamados Cholo en la costa Pacífica; Chamí o Meme en Risaralda; Katío en Antioquia y Eperara como ellos mismos se llaman en Nariño y Cauca. Esta etnia está conformada por 108.533 individuos aproximadamente, en Colombia (DNP 2010).

2.2. Reseña etnohistórica

Los resultados de las investigaciones sobre los Emberá chamí, Emberá katío, Emberá dóbidaa, eperara siapidara² establecen que todos compartieron una historia común y por ende características semejantes de acuerdo con el Ministerio de Cultura, los Emberá compartieron la lengua nativa, la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno no centralizado, la cultura selvática y la estructura social, que radica en unidades familiares la base de su sociedad y en unidades sociales más amplias, el desempeño de diversas actividades. Su organización les permitió evadir a los enemigos, separarse y conformarse posteriormente en lugares apartados de la "civilización", también les ayudo su sistema económico basado en la agricultura itinerante del maíz, caza, pesca y recolección, se localizaron las cuencas medias y altas de los ríos Atrato y San Juan, a la vez que los afluentes orientales del río Baudó, “la familia se encargaba de las actividades cotidianas de subsistencia; de igual manera, los trabajos comunales y los subgrupos se aliaban o enfrentaban entre sí o frente a un enemigo común, como sucedió en 1637 cuando se aliaron los Tatamá y los Cirambirá para aniquilar la expedición de Martín Bueno”. (Ulloa, 2004)

La conquista y la colonia reformaron la vida y el territorio de los Emberá, toda vez que la explotación de recursos naturales, tales como la minería, la madera y el caucho están asociados a las economías extractivas y a los intereses nacionales, hecho que genera ciertos impactos en las dinámicas cotidianas de la población aborigen en sus modos de vida y en la transformación de sus

² Estos tres pueblos diagnosticados en riesgo por el Auto No. 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional.

prácticas culturales y ancestrales, por estas razones muchos Emberá se dispersaron y tuvieron desarrollos distintos, a partir de los contextos naturales en los que se albergaron, y condicionados también por el tipo de poblaciones y de interacciones que afrontaron y que ejercieron diferentes influencias en cada grupo asentado en diferentes territorios. (Mincultura, 2010).

Fue a principios del siglo XVI cuando se inició la colonización del territorio Emberá, por que el enfrentamiento entre los nativos por más de cien años y el ambiente de selva tropical dificultaron a los españoles la colonización de este territorio, las riquezas chocoanas de difícil acceso, hicieron que su conquista fuese tardía, hasta el establecimiento de las gobernaciones de Popayán y Antioquia. Ya en el siglo XVII, se inició el reconocimiento del río Atrato y los contactos comerciales, por medio de los cuales los indígenas adquirirían herramientas metálicas que llevó, los jesuitas realizaron misiones evangelizadoras en el San Juan y franciscanos en el Atrato, estos últimos decidieron corregirlos con castigos, actitud que desencadenó las protestas y los levantamientos indígenas, y en 1684 se dio la más fuerte, disuelta por el ejército español, obligándolos a huir. Entre 1718 y 1730, se fundaron nuevas poblaciones en el alto San Juan y en el Atrato, creció la colonización aurífera y originándose el cimarronismo por esta razón los Emberá se expandieron hacia el bajo Atrato y costa Pacífica en 1750, desterrando a otros indígenas habitantes de dichas zonas. Las características particulares de cada zona Emberá se han conformado de acuerdo con su tradición cultural y con una serie de factores, tales como las singularidades regionales de los territorios que habitan, los contactos con los colonos, las diferentes áreas climáticas y el grado de interrelación con la sociedad mayor. Estas diferencias no les impiden mantener su unidad a nivel de la concepción del mundo y de su relación con el entorno. “Por lo tanto, puede hablarse de los Emberá en general por encima de las particularidades regionales,

haciendo sólo la salvedad para la diferenciación, de acuerdo con las condiciones del medio geográfico que habiten, en Emberá de río y Emberá de montaña”. (Vasco, 2000). En 1950 La violencia afectó a la nación Emberá, contribuyó al desplazamiento de esta etnia hacia Panamá y al incremento de la población en el Baudó y en la costa Pacífica.

“Así mismo, los Emberá son amenazados bruscamente en su territorio por los proyectos institucionales como: la base militar de bahía Málaga, la carretera panamericana, el canal interoceánico, la explotación de minerales y recursos naturales, las hidroeléctricas y represas, Caso Urrá I y Urrá II”. (Ulloa, 2004).

El indígena Aníbal Murillo en 1975 descubrió una mina de oro en la cuenca del río Azul, y la denunció ante la alcaldía de Bagadó, esto desencadenó mucha violencia contra los indígenas especialmente por conflictos con el hacendado Ricardo Escobar quien asume que él es el dueño legítimo de la mina, así como los actores armados que llegaron trayendo consigo la delincuencia, inseguridad y muerte obligando a la población indígena a desplazarse hacia diferentes centros urbanos. Este hecho histórico del Pueblo Emberá está documentado en varios relatos entre ellos el libro “El Oro y La Sangre” del periodista y escritor antioqueño Juan José Hoyos: se narra una historia que se desarrolla en el Alto de Andágueda, Chocó. En la década de los 80 se empieza a generar un nuevo conflicto, esta vez ya no sólo con los hacendados, sino con los poderes paraestatales que han visto en la región del Chocó una zona importante en el mapa geoestratégico de la guerra, ahondando de esta forma el proceso de descomposición social que venían presentando los indígenas del Alto Andágueda en las décadas anteriores. “Es el año de 1980 el momento en el que los Emberá acceden al reconocimiento de su resguardo, al mismo tiempo que adoptan el Cabildo como modalidad de gobierno y aparentemente el Estado les protege en sus derechos

respecto a su territorio ancestral. Pero es en ese mismo año cuando por orden judicial sus tierras son tomadas por asalto, 200 policías penetran hasta el río Colorado, destruyen las viviendas de los indígenas, muere el gobernador de la comunidad Luis Enrique Arce, lo mismo que otros dos miembros de la comunidad y tres niños se ahogan en el río en el momento de la huida”. (Villa, William, 1980).

2.3. Economía

La economía de los Embera-Katio está sostenida en el cultivo del maíz, seguido por el plátano, la caza realizada por los hombres, las mujeres se dedican al cuidado del hogar, la pesca, la huerta casera y cría de especies menores. La elaboración de artesanías es tradicional entre sus costumbres.

2.4. Organización social y política

Los Embera-Katio históricamente, se organizaban por familias y el liderazgo lo ejercía el abuelo, después de la Ley 89 de 1890, el cabildo se instauró como su forma de organizar la vida política de sus comunidades. La forma de elección de los cabildos se realiza primero a nivel local, en donde las comunidades eligen los cabildos locales y sus equipos y éstos luego eligen al Cabildo Mayor. Dentro del equipo hay personas delegadas para el control de los temas de explotación de madera y los recursos naturales, para dirigir el consejo territorial, para educación y para organización. Las decisiones se toman de forma colectiva garantizada a través de la realización de

asambleas en donde se incluyen las organizaciones de mujeres, autoridades tradicionales y líderes locales.

2.5. El pueblo Emberá es víctima de la violencia en medio del conflicto interno armado

La situación de violación de los derechos Humanos es muy grave en el período 2002-2010 fueron desplazados de sus propios territorios un total de 12.651 Emberá por las razones del conflicto armado y se perpetraron 152 asesinatos políticos, mientras que 4.396 fueron amenazados colectivamente. Tal como lo evidencia la tabla No. 4.

Tabla 3 - Violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH del pueblo Emberá 2002-2010

Pueblo	Asesinato político	Acciones bélicas	Amenaza colectiva	Amenaza individual	Desaparición forzada	Detención arbitraria	Herido	Secuestro	Tortura	Violencia sexual	Desplazamiento
Emberá	30	85	3295	13	3	29	11	13	36	0	8484
Emberá Chamí	68	12	91	26	34	37	62	4	16	0	60
Eperara Siapidara	10	0	21	0	1	0	3	0	1	1	2060
Emberá katio	44	132	989	11	4	43	14	3	7	0	2047
TOTAL	152	229	4396	50	42	109	90	20	60	1	12651

Fuente: Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas de Colombia Onic-Cecoin

Como resultante de una violencia estructural y de carácter político la integridad física y cultural contra el pueblo Emberá se evidencia un fuerte impacto sobre su dinámica organizativa y política, las amenazas son el resultado de la falta de políticas de protección y garantía de los Derechos Humanos en su territorio.

En relación con las obligaciones del Estado Colombiano frente a la situación de los pueblos indígenas la CIDH ha declarado lo siguiente:

Informe anual (CIDH: 2005)

La CIDH en su informe anual 2005 exige al Estado colombiano un mayor avance el respeto a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. En comparación con el informe del año 2004 expresa la crítica situación por la que atraviesan los indígenas en Colombia entre ellos los pueblos kankuamo, wayúu, embera chamí, embera katío, wiwa, arhuaco, paez y pijao. Hace alusión a aspectos tales como desnutrición y enfermedades endémicas, generados como consecuencia de los bloqueos alimentarios, la falta de atención médica y la carencia de servicios básicos. Resalta además, para el caso de los indígenas del departamento del Cauca, que a pesar de la vigencia de las medidas cautelares y provisionales existe una constante preocupación por la vulneración de los derechos humanos representada en el desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos, desapariciones forzadas y masacres. Considera la Comisión que los derechos vulnerados en este informe son la amenaza no sólo a la vida e integridad personal de sus miembros, sino también su existencia como pueblos. Pronunciándose frente a los pueblos del norte del departamento del Cauca reiteró “su preocupación por la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en Colombia reflejada en los asesinatos, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados de los que han sido objeto sus miembros, en varios casos, a pesar de la vigencia de medidas cautelares y provisionales”. Además, señaló que “los constantes actos de violencia perpetrados en contra de los pueblos indígenas [...] amenazan no sólo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos” Se deduce que los derechos

vulnerados en este informe son la amenaza no sólo a la vida e integridad personal de sus miembros, sino también su existencia y pervivencia como pueblos³.

Informe anual (CIDH: 2009)

La CIDH centro su atención las afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de manera individual y colectiva. También recalca el interés de los distintos grupos armados sobre los territorios indígenas y la forma como se siguen utilizando estos espacios como corredores estratégicos para el procesamiento y cultivo de sustancias ilícitas. Llama la atención de la CIDH la falta de acuerdo entre el Estado y las organizaciones sobre el número real de pueblos indígenas en Colombia: “entre las organizaciones indígenas y el Estado no existe un acuerdo que permita determinar con certeza cuál es el número de pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, las cifras oscilan entre 84 y 102”⁴. Enfatiza en la importancia del enfoque diferencial en la atención al desplazamiento forzado de los pueblos indígenas partiendo en que sea adecuada con sus particularidades sociales y culturales. Señala, además, que el seguimiento a la implementación del Auto 004 de 2009 emanado de la Corte Constitucional en la atención adecuada con enfoque diferencial hacia las indígenas víctimas del conflicto armado. En consonancia con el

³ CIDH. Informe Anual 2005

⁴ CIDH. Informe Anual 2009

informe de la CIDH de 2009 los derechos vulnerados a los pueblos indígenas son la autonomía, sus derechos territoriales y culturales.

Medidas Cautelares CIDH

Comunidad del Alto Guayabal-Coredocito del Pueblo Emberá, Colombia⁵

El 25 de febrero de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito, del Pueblo Emberá, declarada "So Bia Drua" - área humanitaria, del Resguardo Indígena Uradá Jiguamiandó, Municipio de Carmen del Darién, Departamento de Chocó, Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que esta comunidad habría sido objeto de actos de violencia que pusieron en riesgo sus vidas e integridad personal. Se alega, entre otros hechos, que el 30 de enero de 2010, dos helicópteros y un avión de las fuerzas armadas habría realizado un ametrallamiento y bombardeo a 300 metros del asentamiento principal de la comunidad, dando con la casa de una familia donde se encontraban tres adultos y dos niños, que resultaron heridos. Se indica, por ejemplo, que el señor José Nerito Rubiano Bariquí fue herido en el tórax con arma de fuego, a raíz del cual sufrió ruptura de columna vertebral y quedó parapléjico. Según los solicitantes de la medida, la presencia militar en la zona estaría relacionada con la reanudación de la explotación minera. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia que adopte las medidas necesarias a fin de proteger la vida e integridad personal de 87 familias de la Comunidad Alto Guayabal-Coredocito; que

⁵ <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas>

concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones de investigación adoptadas respecto de los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares a fin de remover los factores de riesgo para los beneficiarios⁶.

Miembros del pueblo Indígena Embera Chamí (Colombia)⁷

El 15 de marzo de 2002, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de 40 indígenas Embera Chamí de los resguardos y asentamientos de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo, Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera-Pirza, Totumal, La Trina, La Albania, Cerro Tacón, La Soledad, y miembros del CRIDEC. Desde junio de 2001 estas comunidades — señaladas públicamente por agentes del Estado como colaboradores de la guerrilla— han sido objeto de amenazas y actos de hostigamiento y violencia por parte de las AUC. La información disponible indica que un grupo armado incursionó en la comunidad de Escopetera-Pirza donde produjo destrozos materiales, intimidó los presentes, asesinó a Leonardo Díaz Becerra (ex-cabildante del resguardo) e hirió a Luis Eduardo Flórez (fiscal suplente del cabildo indígena). Los peticionarios indican que a pesar de los esfuerzos de un número de organizaciones no gubernamentales, las autoridades no adoptaron medidas para prevenir la incursión paramilitar en la zona y que con posterioridad no prestaron apoyo para ingresar a la zona con fines humanitarios. Posteriormente la CIDH fue informada sobre el asesinato de la

⁶ <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp>

⁷ <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas>

dirigente indígena María Fabiola Largo y un atentado contra la vida del ex gobernador indígena Miguel Antonio Largo Pescador, ambos beneficiarios de las medidas cautelares del 9 de abril de 2002 en el resguardo de Cañamomo-Lomaprieta. El Estado informó asimismo sobre una misión conducida por el DAS con el fin de esclarecer los ataques, pero indicó que los testimonios recabados “no suministraron datos de interés que permitan la individualización de sus autores, así como aportar indicios a la autoridad encargada de la investigación”. Indicó que el Batallón Ayacucho había efectuado operaciones de contraguerrilla en Riosucio y que la Policía del municipio prestaba seguridad a los locales donde se reunía la Comunidad⁸.

Kimi Domicó y miembros de la Comunidad Indígena Embera Katío del Alto Sinú (Colombia)⁹

El 4 de junio de 2001, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Kimi Domicó, Uldarico Domicó, Argel Domicó, Honorio Domicó, Adolfo Domicó, Teofan Domicó, Mariano Majoré, Delio Domicó, Fredy Domicó y demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katío del Alto Sinú secuestrados en el cabildo comunitario y zonas aledañas. Se solicitó al Estado colombiano adoptar de manera urgente las medidas necesarias para establecer el paradero y proteger la vida e integridad personal de las personas arriba mencionadas, adoptar las medidas necesarias para proteger a los demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katío del

⁸ <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp>

⁹ <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas>

Alto Sinú, de común acuerdo con los peticionarios, e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los atentados en contra de la Comunidad¹⁰.

La situación de la violación de los Derechos Humanos del pueblo indígena Emberá está expresada por la Corte Constitucional en las tutelas relacionadas a continuación:

Sentencia T-380/93: Caso Chajeradó

En el año 1993 la Organización Indígena de Antioquia interpuso acción de tutela contra la Corporación Nacional de Desarrollo del Chocó (Codechocó) y la Compañía de Maderas del Darién (Madarién) por la explotación forestal llevada a cabo entre junio de 1988 y noviembre de 1990 en Chajeradó, Municipio de Murindó Antioquia, por parte de Reinerio Palacios y las omisiones de Codechocó, relacionadas con la explotación maderera desde el año 1987 hasta 1991, hecho que afectó las dinámicas socioculturales del pueblo emberá en esta zona del departamento de Antioquia. Mediante Sentencia de la Corte Constitucional se ordenó a la Corporación Nacional de Desarrollo del Chocó a elaborar un programa de restauración ambiental con el fin de amparar los derechos de la comunidades indígenas con el fin de preservar su integridad cultural y su supervivencia como consecuencia de la destrucción de los bosques en el sitio que ocupaban¹¹.

¹⁰ <http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp>

¹¹ Corte Constitucional. Sentencia T- 380/93

Tomando como referencia la Sentencia T-380/93 se vulneran los derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad, a la integridad étnica - cultural y territorial -, el derecho a la especial protección del Estado como grupo étnico, los derechos de los niños y los derechos consagrados en tratados internacionales sobre Pueblos Indígenas, particularmente el Convenio 169 de la O.I.T. ratificado por la ley 21 de 1991. (Corte Constitucional, 1993:3). En tal sentido, la Corte Constitucional es enfática al expresar que no deben confundirse los derechos fundamentales con los derechos colectivos de otros grupos humanos, dado que “la comunidad indígena es un sujeto colectivo y no la sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos”. (Corte Constitucional, 1993:1)

Sentencia T-652/98: Represa de Urrá

El proyecto de la Hidroeléctrica de Urrá I, situado sobre el río Sinú en el Departamento de Córdoba. Este proyecto tiene varios impactos ambientales tales como la desviación del río Sinú, y la inundación de secciones de los territorios del pueblo Embera-Katío; inicialmente se había calculado el área de tales secciones en cuarenta y tres hectáreas. Sin embargo, después de este estimado se manejaron diferentes cálculos y se generó incertidumbre alrededor de las dimensiones de la inundación¹².

Esto generó una catástrofe ambiental, dado que inundó más de siete mil hectáreas de bosques y afectó directamente los medios de vida y la propia existencia del pueblo indígena embera

¹² Corte Constitucional. Sentencia T-625/98

katío. En 1995 bajo un gobierno centralizado para enfrentar la amenaza del proyecto hidroeléctrico de Urrá, pero a finales de 1996 se desató un conflicto interno dentro de las comunidades Embera-Katío sobre la composición del Cabildo Mayor. En 1997 Urrá S.A. solicitó formalmente la ampliación de la licencia ambiental para el llenado y funcionamiento del embalse. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, mediante auto número 828 del 11 de noviembre de 1997, negó la licencia con base en el incumplimiento de varios requisitos previos, entre ellos, el proceso de consulta y concertación con el pueblo Embera-Katío. Mediante Resoluciones No. 27 (Febrero 20, 1989), No. 142 (Diciembre 18, 1992) y No. 167 (Diciembre 14, 1992), el Gobierno Nacional declaró de utilidad pública e interés social el territorio necesario para la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá I bajo la administración de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA). El proyecto lo inició ISA en 1980, pasó a ser responsabilidad de CORELCA en 1982, y en 1992 se creó para manejarlo la Empresa Multipropósito Urrá S.A. (Corte Constitucional, Sentencia T-652/98:3 y 4)

Los derechos fundamentales de la comunidad Emberá Katío fueron tutelados por la Corte Constitucional con fecha del 10 de noviembre de 1998. En la Sentencia T-380 de 1998, ordenó al gobierno colombiano la suspensión de la licencia ambiental hasta surtir el proceso de consulta con los indígenas y establecer mediante un acuerdo las medidas compensatorias con el fin mitigar los daños como consecuencia de la represa.

Los derechos que se vulneran en este caso son: el derecho a la propiedad colectiva, el derecho al territorio, derecho a la integridad cultural, social y económica, el derecho a la consulta previa y el derecho a la diversidad étnica y cultural.

Sentencia T-769/09: Proyecto Mandé Norte

El contrato de concesión Mandé Norte cuyo objeto era la exploración y explotación de una mina “de cobre, oro, molibdeno y minerales concesibles”, en los departamentos de Antioquia y Chocó, fue presentado el 14 de abril de 2004 por parte de la compañía Muriel Mining. Este proyecto tenía un término de 30 años, con carácter prorrogable por el mismo lapso de tiempo, resultando afectados los territorios del resguardo indígena “Embera de Uradá Jiguamiandó” y más de once comunidades indígenas, dos comunidades negras y un número indeterminado de comunidades campesinas.¹³ Según los testimonios recogidos por la Corte Constitucional, éstos adujeron que “la ejecución del proyecto perturba directamente *“los territorios ancestrales de otras comunidades indígenas cuyos asentamientos y resguardos se encuentran en los municipios de Frontino Murry, Urrao, Vigía del Fuerte, Carmen del Darién y el Municipio de Murindó”* (Corte Constitucional, Sentencia T-769/09:3)

Ante los impactos ambientales por causa de la exploración y explotación, los cuales ponen en alto riesgo la biodiversidad por la riqueza de la flora y fauna de la región, el uso de residuos de los metales y minerales generarían daños muy negativos al medio ambiente, al hábitat, a la salud, los cultivos y la pérdida de las economías tradicionales de las comunidades de la zona. (Corte Constitucional, Sentencia T-769/09: 3)

Desde marzo de 2006 se dio inicio al proceso de consulta previa con las comunidades, y las personas que asistieron no tenían ni la autoridad, ni la capacidad para pactar los respectivos

¹³ Corte Constitucional. Sentencia T-769/09

acuerdos. Se realizaron varias reuniones, en las cuales siempre operó la arbitrariedad, dado que se trató de concertar con miembros de las comunidades que no tenían ningún poder de decisión y ningún nivel de decisión. El 20 de abril de 2008 las comunidades indígenas y afrocolombianas afectadas por los impactos del proyecto objetaron el proceso de consulta que se venía desarrollando, y así las cosas, el Ministerio de Justicia prestó oídos sordos al rechazo de la consulta por parte de las comunidades. (Corte Constitucional, Sentencia 769/09: 3, 4, 5 y 43)

En el año 2009 la Corte Constitucional tuteló el derecho de las comunidades afectadas, reafirmando el derecho al debido proceso a la consulta previa, y ordenó la suspensión de las actividades de exploración y explotación del proyecto en mención en las comunidades afectadas en los departamentos de Antioquia y Chocó. Por lo tanto, ordena al Ministerio del Interior rehacer los trámites para la realización de la consulta previa de manera debida con todas las comunidades que pudieran resultar afectadas con el desarrollo de dicho proyecto. (Corte Constitucional, Sentencia T-769: 43, 44). Al tenor de lo expuesto en dicha sentencia, se vulneran los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y social, a la identidad cultural, a la autonomía de las comunidades, a la protección de la riqueza de la Nación y al debido proceso.

En el escenario de guerra, la violencia y el conflicto desmejoraron las condiciones de vida de la población indígena en el pacífico colombiano y se convirtió en un río humano de indígenas que huyen de sus territorios de origen a los grandes centros urbanos para salvar sus vidas y llegan a la ciudad a ejercer la mendicidad, ante la falta de garantías para su permanencia y continuidad en sus propios territorios, el pueblo Emberá es víctima de la violencia en medio del conflicto interno armado. Es así como en el año 2005 arribaron a Bogotá 101 Embera-Katio, de la comunidad de

Cascajero, que habitaban el resguardo del Alto Andágueda en el Chocó, la situación era crítica y su único recurso de sobrevivir en esta ciudad era la mendicidad. Las instituciones del Distrito (Departamento Administrativo de Bienestar Social DABS hoy Secretaria Distrital de Integración Social, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud) en coordinación con La Agencia Presidencial para la Acción Social hoy Departamento de la Prosperidad Social DPS, el ICBF, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y el ACNUR conformaron una red de alianzas inter-institucionales para abordar esta problemática. Así pues, se procedió a determinar la situación en la que se encontraban los indígenas en la ciudad de Bogotá con respecto a las condiciones de salubridad, hábitat y nutrición, entre otras; con el objetivo de responder a la situación de emergencia.

Como resultado de este trabajo se generaron compromisos institucionales para atender a la comunidad, de manera que la primera tarea realizada fue la reubicación de estos indígenas en un alojamiento temporal del DABS con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, habitabilidad, salubridad y seguridad alimentaria. Acción Social procedió a valorar de manera prioritaria las declaraciones de desplazamiento de estos indígenas con el objetivo de inscribirlos en el Sistema Único de Registro y entregarles su ayuda humanitaria de emergencia. Del lado, de la Secretaría de Salud se procedió a la realización de visitas al alojamiento de parte del hospital de centro oriente para dar tratamiento a los focos de tuberculosis que presentó la comunidad. La Secretaría de Gobierno, por su parte, realizó una jornada de documentación (Expedición de cédulas, Registros civiles y Tarjetas de Identidad) en coordinación con la Oficina de Atención a Población Vulnerable ACNUR- Registraduría Nacional del Estado Civil. El ICBF brindó la atención para los menores de edad de acuerdo a su oferta disponible.

El auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional define el alto riesgo de exterminio en el que se encuentran los pueblos indígenas afirma: “los individuos y comunidades indígenas en situación de desplazamiento tienen, por su falta de capacidades y competencias culturales para afrontar la vida urbana en condiciones extremas de miseria y desprotección, una mayor exposición a riesgos de todo tipo, que incluyen los peligros de ser víctimas de violencia sexual, de caer en redes de comercios ilícitos, de verse obligados a la mendicidad, de explotación, y especialmente de discriminación (por intolerancia, racismo e ignorancia en los lugares de recepción)”.

Luego de revisar las sentencias de la Corte, los informes de la CIDH, puede concluir que el pueblo indígena Emberá-katío es víctima del conflicto armado interno, lo que lo ha obligado a migrar a las ciudades en especial a la Capital en busca de mejorar sus condiciones de vida. Al revisar las normas internas observamos que se han incorporado los principios de la legislación internacional de la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH.

En el capítulo 3 se registra el trabajo de campo sobre la investigación de la implementación de la política pública como el Distrito Capital y sus entidades en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas caso específico de los Embera-Katio, su evolución y avance.

3. Asentamiento del pueblo Emberá–Katío en Bogotá una mirada desde la Defensa de los Derechos Humanos

El desplazamiento del pueblo Embera-Katio hacia la ciudad de Bogotá, tiene sus orígenes en: el asedio de distintos actores armados, terratenientes y narcotráfico cuyo eje giraba en torno a una mina de oro en el territorio del Alto Andágueda en el departamento de Chocó. Estos procesos provocaron el desplazamiento de comunidades enteras del pueblo Emberá hacia los centros urbanos de las ciudades capitales del país como Medellín, Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Bogotá.

Este trabajo de investigación y seguimiento es la herramienta para comprender la situación de los indígenas Emberá-katío en Bogotá en el siglo XXI. Teniendo en cuenta el drama cotidiano que afrontan al estar dispersos a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá, sus puntos de referencia y de concentración son los barrios La Favorita, San Bernardo y Santafé, ubicados en pleno centro de Bogotá y las localidades de Usme, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar. De ello, se infiere que su ubicación en los barrios marginales de la ciudad, lo que los obliga a ser parte de estos nodos de miseria donde se desarrolla su vida cotidiana, un medio que es completamente hostil y peligroso para este pueblo indígena y sus costumbres, ya que este entorno es totalmente diferente a su hábitat de origen. Toda su vida cambia al enfrentarse a esta selva de cemento, cambia su régimen alimenticio, su organización social y familiar, el clima, la vivienda, la forma de hacer frente a las enfermedades. Todas estas circunstancias han sido analizadas por la Corte se ha pronunciado

enfáticamente al respecto en la conocida Sentencia T-025 de 2004 y se le ha hecho seguimiento en su Auto 004 de 2009 donde se advierte:

“Primero. - DECLARAR que los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas. Segundo. - DECLARAR que el Estado colombiano está en la obligación doble de prevenir las causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, y atender a la población indígena desplazada con el enfoque diferencial que para ello se requiere.” (Auto No. 004 de 2009).

En este contexto legal de obligaciones con los pueblos indígenas del Estado Colombiano en el marco nacional e internacional, y en cabeza del Distrito Capital se ejecuta el seguimiento al Caso de las 48 familias Embera-Katio, en el centro de Bogotá, en pleno siglo XXI:

Primera Fase Declaración del Estado De Emergencia, Bogotá diciembre de 2015: La situación de indefensión de la población desplazada Emberá-katío, asentada en Bogotá, en condiciones de vulnerabilidad e indefensión da cuenta de una falla gravísima en la institucionalidad estatal para atender en condiciones de dignidad y efectividad la demanda de del pueblo indígena desplazado que refugiado en Bogotá, es un panorama desolador y peligroso que desembocó en graves problemas de salud y seguridad, especialmente para aquellos indígenas obligados a utilizar llamados paga-diarios que no cuentan con condiciones de seguridad ni higiene, ubicados en el centro de Bogotá, por lo cual se decretó una la situación de emergencia de seguridad, para la población Emberá-katío, el 15 de diciembre de 2015. Por la emergencia, concurren las instituciones del orden Distrital y Nacional para trabajar conjuntamente con los líderes Emberá-

katío, en la búsqueda de la mejor solución para las 48 familias en situación de peligro. El 27 de diciembre la comunidad aceptaron voluntariamente ubicarse en el en el área interna del Coliseo Cubierto de Bogotá, con el fin de estar mejor resguardados, estadía provisional, y contando con el acompañamiento de personal de las Secretarías Distrital de Salud, apoyo que incluía ambulancias, dispuestas para atender emergencias de las personas enfermas y especialmente los menores de edad. La Secretaria Distrital de Integración Social, acude con personal especialista en atención a poblaciones indígenas desplazadas, inician el censo de las personas. La red de apoyo de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), inicia labor de protección de los niños y de las mujeres gestantes en especial aquellas que se encuentran enfermas. Se realizaron acciones para la ubicación transitoria y en mejores condiciones, mientras se continuaba en la búsqueda de viviendas albergue que les garantizaran una mejor calidad de vida provisional en Bogotá, atendiendo que se encuentra en fase preparación el retorno de estas comunidades a su territorio. El 6 de enero del 2016, se realizó una reunión convocada por la Secretaria de Gobierno Distrital para tratar el tema: “Situación Derechos Humanos comunidad Indígena Embera-Katio desplazada del Resguardo del Alto Andágueda (Bagadó – Chocó), en emergencia de seguridad y salud ubicadas en El Coliseo el Campin”. Las Entidades participantes fueron: Defensoría del Pueblo, Secretaria de Seguridad, Alta Consejería Distrital para las Víctimas y Derechos Humanos, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Salud, Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, Dirección de Consulta Previa, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En la reunión cada entidad informo sobre la gestión adelantada y los servicios prestados a la población Embera-Katio, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informó: la entrega de las 12 familias registradas en el RUV (Registro Único de Víctimas), el dinero fue consignado

en cuentas bancarias a nombre de cada una de los hombres cabeza de familia y ellos autónomamente decidieron pagar el arriendo de una de las casas en San Cristóbal Sur. Para las demás familias se adelantan acciones para el establecimiento de un albergue el cual estará listo en 10 días. Situación de índole transitoria por que el objetivo es Retorno de la comunidad a su territorio, garantizando los criterios establecidos por ley. Por parte de la población tomo la vocería el Sr. Alfonso Viricha quien manifestó que seguían vulnerados en sus derechos, teniendo en cuenta que las instituciones no están cumpliendo debidamente todos los beneficios que les ha dado la tutela, en la Sentencia 007 de 2014 a favor de la población indígenas del Alto Andagueda del municipio de Bagado - Choco, del Tribunal Superior del Distrito Judicial Antioquia, Sala civil Especializada en Restitución de Tierras. De esta reunión quedaron los siguientes compromisos:

1. La consecución inmediata del albergue transitorio para las 48 familias Embera-Katio, mientras se concluyen la preparación del retorno de sus miembros al territorio del resguardo.
2. Realizar una nueva reunión interinstitucional del martes 12 de enero, concertada con las autoridades distritales y nacionales responsables de la atención de los indígenas víctimas del desplazamiento con el objetivo de evaluar la atención brindada a las 48 familias Embera-Katio.
3. Realizar una segunda reunión con los voceros de la comunidad y las autoridades estatales del orden nacional y distrital el miércoles 13 de enero a las 8 de la mañana en la Unidad de Víctimas (Cra. 7 No. 29-34), en la cual se tratarán los siguientes temas: de educación: Cupos para niños y niñas y adolescentes mientras permanecen en Bogotá y también para los jóvenes en territorio. Garantizar condiciones de vivienda digna en el territorio. Estado de avance del plan de Retorno al territorio, garantizando el cumplimiento de los tres principios establecidos legalmente: Dignidad, Voluntariedad y Seguridad. Realizar por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y

Minorías del Ministerio del Interior un proceso de capacitación sobre el Decreto 1953 de 2014 por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política, y el Decreto 1088 de 1993, por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas. (Informe Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas – Defensoría del Pueblo, 2016)

Segunda fase. Traslado al alojamiento: Las 48 familias Embera-Katio permanecieron en el Coliseo el campin hasta el 18 de enero de 2016 cuando fueron trasladados al Alojamiento de la Caracas con calle 18: Se realizó un trabajo conjunto con las instituciones del orden Nacional y Distrital con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar y proteger los derechos de la población Embera-Katio con enfoque de Derechos y enfoque Diferencial. La actividad se llevó a cabo en dos puntos, así: Un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá, estuvieron presentes en el Coliseo el Campin para verificar todos los aspectos de salida de las familias, garantizando la debida orientación y el trato digno a las familias por parte de los asesores de las instituciones convocadas responsables de Atención a las comunidades étnicas del Distrito Capital, liderados por la Alta Consejería para la Atención de las víctimas. Otro grupo de funcionarios de la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos en el Albergue ubicado en la calle 18 con avenida Caracas, labor cumplida desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, allí se constató la llegada de 180 personas al alojamiento de la Calle 18, agrupadas en 48 familias. – Ver anexo 3 -

La Alta Consejería informó a las instituciones presentes y a la comunidad la llegada de cuatro (4) familias no registradas como víctimas (19 personas) y que estaban en el grupo del Campin, que serían ubicadas por parte de la Secretaría del Gobierno del Distrito en otros lugares: Centros Amar del Distrito, las mujeres y niños de estas familias y, los hombres en un hospedaje de una Fundación. En el alojamiento se les garantizó en condiciones de oportunidad, calidad y suficiencia, todos y cada uno de los componentes de la Atención Humanitaria de Emergencia, la Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento ACNN es el operador que administra el alojamiento y la alimentación durante el período provisional que permanecerá en este lugar, mientras se termina el proceso de retorno a su territorio, bajo la supervisión de la Unidad de Víctimas, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, ICBF, y el Distrito con presencia de las secretarías de Salud, Educación, e Integración Social. (Informe Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas – Defensoría del Pueblo, 2016).

3.1. Acompañamiento y verificación de cumplimiento de los compromisos

En relación con el proceso de acompañamiento y verificación de cumplimiento de los compromisos a la población desplazada Embera-Katio ubicada en el alojamiento de la Caracas con Calle 18, en la ciudad de Bogotá, se asistió semanalmente como servidora pública de la Defensoría del Pueblo de la Regional Bogotá al Comité Interinstitucional, convocado por la Unidad para la atención y reparación integral a las de Víctimas, en este espacio se realizó la coordinación con las entidades distritales y nacionales para garantizar y proteger los Derechos Humanos de la población indígena Embera-Katio, con enfoque étnico. – Ver cuadro 1-

Cuadro 1

Comité interinstitucional

Lugar de reunión	Instituciones - Participantes	Temas
Alojamiento Embera-Katio	Defensoría Del Pueblo Unidad Para La Atención y Reparación Integral A Las Víctimas ICBF IDIPRON SDIS SDS SED SDM Operador: Asociación Cristiana Nuevo Nacimiento	Salud Educación Retorno Gobierno Propio Manual De Convivencia

Fuente: Acta de reunión del Comité interinstitucional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 2016. Elaboración propia

Dentro de los objetivos alcanzados en este proceso se pueden referir que en cuanto al Derecho a la Salud se logró realizar un diagnóstico a todas las familias y se superó la crisis salud, con el Proyecto de Etnias, que cuenta con un equipo de Enfermera, Auxiliar de Enfermería, Técnico y Psicólogo, para realizar el acompañamiento a la comunidad en el alojamiento. Toda la comunidad Emberá-katío del alojamiento se encuentra afiliada a una EPS en Bogotá. Cada una de

las acciones desarrolladas por la Secretaria Distrital de Salud han sido puestas en conocimiento y consultadas con los líderes de las comunidades; al igual que el trabajo articulado con el operador del alojamiento: la Asociación Nuevo Nacimiento y la UARIV. Esto con el fin de avanzar en la garantía del derecho a la salud, partiendo del reconocimiento del significado de la salud como un derecho amplio y colectivo en el cual convergen diferentes ámbitos de desarrollo del ser humano desde lo social, físico y mental.

Durante el período de enero a agosto de 2016, se logró avanzar en acciones en el acceso y atención en salud a la población indígena Embera-Katio mediante el desarrollo de las siguientes actividades: valoración Médica al 100% de las personas del alojamiento por parte de la E.S.E Centro Oriente, para monitoreo de condiciones de salud e identificación de signos de alarma, seguimiento y gestión en entrega oportuna de medicamentos de profilaxis por contacto de TBC a 6 casos de los cuales 2 son adultos, seguimiento y acompañamiento a 9 gestantes y 14 lactantes en el monitoreo de condiciones de salud, 4 actividades colectivas de promoción y prevención en salud en higiene Oral, cuidado del cuerpo, curso psicoprofiláctico y planificación familiar, con la participación de 148 personas. Durante este período se presentaron eventos de interés de salud pública que requirieron de una atención por parte del equipo de vigilancia sanitaria y epidemiológica en lo relacionado a brote de EDA, ERA y un caso de varicela, los cuales fueron manejados por el Hospital Centro Oriente que realizó acciones de aislamiento, monitoreo y activación de ruta de urgencias y emergencias. Es de anotar que se evidencio que existen las barreras de acceso, en relación al proceso de traslado y portabilidad, porque no se cuenta con respuestas oportunas que permitan el traslado efectivo a la EPS – Capital Salud, por parte de la

EPS Barrios Unidos, COMFACUNDI, Pijaos Salud, Comparta y COMFACHOCO. (Informe Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2016).

En lo referente al derecho a la educación se logró que todos los niños del alojamiento accedieran a la educación en colegios distritales de la zona, y se vincularon dos jóvenes como apoyos culturales a la Secretaría de Educación. Durante el primer semestre del 2016, la Secretaría de Educación Distrital (SED) ha garantizado el derecho a la educación de niños y niñas indígenas de las comunidades Embera-katío, mediante el acceso al sistema educativo distrital, brindando apoyos para promover la permanencia educativa tales como alimentación escolar, transporte escolar y útiles escolares y acompañando pedagógicamente a los colegios con enfoque diferencial étnico. Desde la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones (DIIP) de la SED, se ha promovido la estrategia de acompañamiento pedagógico para transversalizar el enfoque diferencial étnico en las instituciones educativas que cuentan con población indígena, de tal suerte que se garantice el derecho a una educación que responda a las realidades culturales, sociales e históricas de estos pueblos indígenas. Es en ese sentido que el equipo de educación Intercultural de la DIIP ha venido acompañando a los colegios Agustín Nieto Caballero y Panamericano de la localidad de Los Mártires y al colegio España de la localidad de Puente Aranda, los cuales cuentan con estudiantes indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Embera Katío. Como resultados de este acompañamiento, se han atendido y acompañado a setenta y siete (77) estudiantes indígenas Emberá-katío distribuidos en las mencionadas instituciones de educación, así:

1. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cuarenta y dos (42) estudiantes en total, de los cuales treinta y dos (32) se encuentran en aulas de Procesos Básicos y ocho (8) en aulas de aceleración primaria, en el marco del Programa Volver a la Escuela; y dos (2)

estudiantes que se encuentran en aulas regulares (un estudiante en grado sexto y otro en grado octavo).

2. Colegio España. Veinticinco (25) estudiantes que se encuentran en un aula de procesos básicos en el marco del Programa Volver a la Escuela.
3. Colegio Panamericano. Diez (10) estudiantes que se encuentran en aulas regulares de los grados primero a tercero.

El apoyo a la permanencia educativa es la medida se busca garantizar la permanencia de los estudiantes indígenas Emberá-katío en los colegios, para lo cual la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED brinda los siguientes servicios: En los colegios Agustín Nieto Caballero y España se presta el servicio de ruta escolar, en el colegio Agustín Nieto Caballero, los estudiantes reciben comida caliente bajo el proyecto de alimentación escolar. En los colegios Panamericano y España, reciben alimentación con refrigerios escolares, en los colegios Agustín Nieto Caballero, Panamericano y España se entregó a los estudiantes Emberá-katío Kits escolares.

La estrategia de acompañamiento, cuenta con tres (3) escenarios:

1. Acompañamiento para reflexionar sobre los Proyectos Educativos Institucionales (PEI). Se propicia espacios para realizar la revisión de los PEI teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico y, sobre todo, las características, situaciones y necesidades de la comunidad estudiantil indígena que hace parte de la institución.
2. Espacios de formación y acompañamiento a docentes. En estos espacios se lidera y promueve la formación con todos los docentes de la institución, sobre temas relacionados

con el enfoque diferencial étnico. Entre los temas abordados están las prácticas pedagógicas interculturales, pedagogías propias y educación intercultural. Los espacios de sensibilización, formación y cualificación buscan aportar a los procesos de revisión de los PEI en cuatro componentes fundamentales: modelo pedagógico, revisión del manual de convivencia, revisión del Sistema Institucional de Evaluación - SIE, y revisión de mallas curriculares y planes de estudio.

3. Acompañamiento pedagógico de tres apoyos culturales indígenas. Como parte del proceso de acompañamiento, el aula diferencial, aceleración primaria en el marco del Programa Volver a la Escuela y aulas regulares de estudiantes indígenas, cuentan con la participación permanente de dos apoyos culturales Indígenas Embera Katío, este acompañamiento de los apoyos culturales indígenas permite el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes. Asimismo, facilita el aprendizaje del español como segunda lengua. Este acompañamiento se genera desde el constante diálogo de saberes entre los profesores del aula diferencial, las aulas regulares y los apoyos culturales. – Ver anexo 4 –

El proyecto de inversión No. 888 bajo el cual se ha venido implementando en enfoque diferencial étnico en los procesos pedagógicos en los colegios Agustín Nieto Caballero y Panamericano de la localidad de Los Mártires y al colegio España de la localidad de Puente Aranda, a donde asisten los niños Embera-Katio y cuyo presupuesto lo detallamos a continuación en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Presupuesto Proyecto 888.

Proyecto de inversión	Descripción	Indicador	Presupuesto programado	Presupuesto ejecutado (junio 2016)
No. 888 “Enfoques Diferenciales” (Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016)	100% de los colegios atienden a la población escolar con perspectiva de género y enfoque diferencial para una escuela libre de discriminación teniendo en cuenta a las poblaciones: víctimas del conflicto armado, en condición de discapacidad, grupos étnicos, orientación sexuales diversas y grupos etarios	Porcentaje de colegios que atienden a la población escolar con enfoque diferencial para una escuela libre de discriminación.	\$ 53,521,375	\$ 25,231,395

Fuente: Informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – 2016.

En cuanto al retorno que es un instrumento territorial, para la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, cuando en un municipio se presentan casos relacionados con grupos étnicos, se introduce en el plan un capítulo particular para estos grupos. En el caso de los Embera-

Katio, en el marco de la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), la Unidad para las Víctimas brinda asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales con énfasis en las herramientas de planeación y las instancias de coordinación, con el propósito de mejorar la capacidad de gestión de las entidades territoriales y fortalecer su compromiso con las víctimas, de cara a la garantía de los derechos humanos de las personas que pertenecen a comunidades étnicas, es por ello, en el caso específico del municipio de Bagadó, en el Departamento del Chocó.

El Plan de Retorno se implementaron las acciones y compromisos asumidos por las entidades para atender a las familias Embera-Katío del Resguardo del Alto Andagueda, se ha adelantaron las reuniones con las entidades pertinentes, mesas específicas por componentes, remisión de información y en el espacio institucional definido por la Ley 1448 de 2011, que es el Comité de Justicia Transicional, para discutir y aprobar el concepto positivo de seguridad para el resguardo del Alta Andagueda y, de igual manera, se desarrolló un espacio de trabajo interinstitucional con el objetivo de realizar el alistamiento necesario para garantizar las condiciones de dignidad de las familias cuando retornen a sus territorios.

En el marco del acompañamiento al proceso de retorno de las familias Embera-katío pertenecientes al resguardo Alto Andagueda, la Unidad para las Víctimas ha realizado reuniones con los líderes de las familias que se encuentran en la ciudad de Bogotá, así como con los jefes de hogar, las instituciones implicadas en la gestión de la oferta necesaria y con las autoridades propias del resguardo, tendientes a garantizar los principios del retorno y los criterios de participación, concertación y coordinación. Adicionalmente, en el marco del acompañamiento adelantado con los líderes y jefes de hogar en Bogotá se desarrollaron reuniones en el alojamiento de la Calle 18 para socializar el proceso de retorno y lo que ello significa, explicar los tres principios, seguridad,

voluntariedad y dignidad y las particularidades en éstos para las comunidades indígenas y revisar las necesidades frente a estos en las comunidades a donde se van a retornar las familias.

Por otro lado, se ha expuesto la oferta gestionada, haciendo énfasis en los componentes de vivienda, seguridad alimentaria y proyectos productivos, educación, salud y fortalecimiento organizativo. Teniendo en cuenta y entendiendo el Comité de Justicia Transicional como máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de la política pública para víctimas a nivel departamental, distrital y municipal, incluidas las autoridades indígenas conforme lo plantea el Decreto Ley 4633 de 2011, las fechas y el cronograma están por definirse. Se tenía prevista la convocatoria del Comité de Justicia Transicional para el mes de agosto para discutir los puntos señalados anteriormente, pero éste se aplazó debido a la ocurrencia de incidentes de orden público que retrasaron las intervenciones institucionales en el territorio del Resguardo y del departamento del Chocó.

Por otra parte, la Alcaldía de Bagadó ha sometido la fecha de la convocatoria al seguimiento de las condiciones de seguridad en el marco del subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición. (Informe Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2016).

CIERRE AL PROCESO

Dentro del arduo proceso de coordinación con territorio y la comunidad indígena en vía de retorno se logró el objetivo: El retorno se efectuó el 20 de diciembre de 2018, La Secretaría de Gobierno, garantizó medidas de protección y que además de las ayudas materiales, junto con atención psicosocial. El retorno lo acompañarán hasta el Chocó funcionarios del Distrito para hacer la transición y el reingreso al resguardo, le apuesta a la transformación. Se entregaron 550 kits de pan coger y de trabajo que les permitan a los indígenas adelantar acciones que garanticen su sostenibilidad. Los kits que serán entregados están compuestos por botas de caucho, semillas para cultivar y herramientas como palas, machetes, martillos, puntillas y alambres de púas. El desplazamiento de la comunidad indígena se hará en buses contratados por la Administración Distrital y previo a este se trasladará el mensaje.

3.2. Alcance de la política pública Distrital frente a la Defensa de los Derechos Humanos

En el caso de la población desplazada Emberá-katío asentada en Bogotá, y el trabajo de investigación realizado nos permite concluir que se logró superar la emergencia de salud y seguridad, presentada en el mes de diciembre de 2015, se reubicó a las 48 familias en el alojamiento Nuevo Nacimiento ubicado, en la Caracas con Calle 18 en condiciones dignas y de seguridad. Así mismo el seguimiento realizado a los compromisos adquiridos por las instituciones del orden Nacional como Distrital, se encontró que la gestión conjunta de las instituciones y la comunidad Emberá-katío, logro una respuesta eficaz a la situación de vulnerabilidad de están población indígena víctima del conflicto armado en condición de desplazamiento. La gestión adelantada ha tenido en cuenta el enfoque de derechos y un enfoque étnico, lo que refleja el desarrollo alcanzado en la política pública de conformidad con:

1. El Acuerdo 359 de 2009 "Por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones".
2. El Decreto 543 de 2011 "Por el cual se adopta la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá".

En este contexto y con base en la investigación adelantada se puede señalar que existe un avance en cuanto a la implementación de la Política Pública para los Pueblos Indígenas en Bogotá y que esta Política Publica se encuentra concordancia con el ordenamiento jurídico existente:

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 7, *"El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana"*, y en su artículo 13 estipula *"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados"*. Así mismo el artículo 93 señala que *"Los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno"*.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, *"Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes"*, que reconoce los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinga de otros sectores de la población nacional. Así mismo la Ley 22 de 1981, por la cual se aprueba la "Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial" dispone en su artículo 2º que *"Los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas (...)"*.

En consonancia con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, es clara la interpretación que debe hacerse a la luz del Plan de Acciones Afirmativas en el Distrito Capital, puesto que allí guarda consonancia con el fortalecimiento de derechos hacia unas minorías étnicas las cuales se encuentran en desventaja frente a la sociedad mayoritaria. Una ciudad de derechos como lo manifiesta el espíritu de la política pública en la ciudad Bogotá, va mucho más allá de las aspiraciones de los pueblos indígenas en relación con sus particularidades históricas sociales y culturales, razón por la cual los pueblos indígenas se encuentran inmersos en las dinámicas del desplazamiento forzado, revitalizando tales dinámicas asociadas a sus procesos organizativos y políticos. Esta garantía de derechos por parte de las últimas administraciones conlleva a hacer una valoración del papel preponderante de los alcaldes de Bogotá quienes de una u otra manera han propiciado la igualdad de los derechos de las poblaciones vulnerables, en especial, los grupos étnicos en el fortalecimiento de una nueva identidad y ciudadanía como forma de visibilizarse y representarse así mismos como sujetos con derechos especiales, al tenor del Convenio 169 de la OIT.

Otra es la mirada que desde la institucionalidad Distrital se refleja en las consultivas distritales para los pueblos indígenas, casos ejemplares son el Decreto 543 DE 2011 *“Por el cual se adopta la política pública para los pueblos indígenas en Bogotá, D.C.”*, y el Decreto 504 de 2017 *“Por medio del cual se adopta el Plan Integral de Acciones Afirmativas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas residentes en Bogotá, D. C.”* Ambos Decretos en la parte considerativa coinciden, aluden y mencionan el reconocimiento de los Pactos y Tratados Internacionales en favor de los pueblos indígenas, las normas de la Constitución Política de 1991, las leyes, Decretos y Resoluciones que

sobre dicha materia deben cumplirse al tenor de las disposiciones legales y constitucionales, tendientes a fortalecer el reconocimiento de los derechos, garantías y la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. No obstante, desde esta perspectiva el Decreto 504 de 2017, guarda amplia relación con el Convenio 169 de la OIT, puesto que allí se enfatizan las acciones afirmativas hacia los pueblos indígenas en los distintos sectores de la administración Distrital: Salud, Educación, Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, Industria y Turismo, Integración Social, Hábitat, Ambiente, Mujer y Gobierno.

Ahora bien, en relación con la *"Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial"*, la administración Distrital ha promovido y articulado una serie de campañas y programas tendientes a erradicar tales formas de exclusión o segregación. Ejemplos de esta son el día de la Cero Discriminación, actividad que se viene desplegando desde el año 2013, y cuyo propósito es hacer un llamado a reconocernos en la diversidad y la diferencia, y *"pretende unir a la sociedad y hacer un llamado a acabar con acciones y prácticas relacionadas con la discriminación racial, de género, por discapacidad, por edad y social"*¹⁴. Otro de los ejemplos es la campaña *"Racismo"*, encaminada a eliminar todas las formas de racismo en la Capital de la República, mediante acciones afirmativas tendientes a la reducción del racismo, para ello, *"se crearon los Centros de Orientación y Fortalecimiento Integral Afrobogotanos (CONFIA), una*

¹⁴ Consultar en: <http://www.participacionbogota.gov.co/un-dia-para-recordar-nuestro-compromiso-contr-la-discriminacion>

Casa de Pensamiento Indígena y un Etnobus. También se han desarrollado dos jornadas de Coworking Étnico para llevarles oportunidades de formación y empleabilidad”¹⁵.

El Decreto 1811 de 1990, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 10 de 1990, en lo referente a la prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas", indica en el artículo 2º: *"Todo programa y, en general, toda acción de salud que se proyecte adelantar en comunidades indígenas deberá ser previamente acordada con ellas y aprobada por los respectivos cabildos y autoridades que ejerzan el gobierno interno en las mismas."*

A la par el Decreto Nacional 804 de 1995, *"Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos"*, en su artículo 1º, señala que *"La educación para los grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos"*.

Y la Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia T-025 de 2004 y en el Auto No. 004 de 2009, se manifestó sobre la protección de los Derechos Humanos de la población en situación de desplazamiento en Colombia, y de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco

¹⁵ <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/racismo-campana-contrala-discriminacion-racial-de-la-alcaldia-penalol>

de la superación del estado de cosas inconstitucional. Que con ocasión del desplazamiento forzado del cual son víctimas los pueblos indígenas colombianos han sido afectados sus territorios y su cultura. Por ello, la constante y creciente migración hacia Bogotá es una forma identificada de salvaguardar su vida y supervivencia como pueblos e individuos.

Según plan de acción cultural 2015-2020 para los pueblos indígenas residentes en Bogotá:

“El enfoque diferencial para los pueblos indígenas está fundado en la identidad y en la interculturalidad como en la diversidad generacional, y aquellas que son propias de la vida social y cultural de los hombres y mujeres indígenas, es decir debe existir una igualdad y atención diferenciada que vaya acorde con el sentir, pensar y actuar de los pueblos indígenas. Este enfoque para la Administración Distrital se convierte en un imperativo político, histórico y ético con el propósito de superar las brechas de desigualdades social, histórica y política con los pueblos indígenas” (2015, p. 8).

La gran cantidad de normas nos demuestran el arduo trabajo del gobierno distrital por garantizar el respeto de los Derechos Humanos de los indígenas que viven en Bogotá, asimismo se han implementado los planes y proyectos en todos los estamentos de la Alcaldía de Bogotá, para la atención y prestación de servicios con enfoque de derechos y enfoque étnico, hoy se cuenta con una línea de acción para atender a las poblaciones indígenas víctimas del conflicto armado.

Conclusiones

Bogotá es una mega ciudad que ha evolucionado en el campo de la Defensa de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que habitan en ella, ha generado políticas públicas con enfoque de Derechos, enfoque étnico y enfoque diferencial, dentro de la demandado constitucionalmente y con énfasis en los Derechos Humanos, en armonía con la normativa internacional y nacional se ha implementado la política pública con la ejecución de acciones afirmativas, en sus planes de desarrollo

La política pública indígena de Bogota reconoce a los/as indígenas como sujetos de derechos, validando su riqueza y legado cultural, espiritual e histórico, y responde a los estándares internacionales en derechos humanos de la población indígena:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966
- Convención Americana sobre Derechos Humanos también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH de 1969
- Protocolo de San Salvador de 1988
- Convenio 169 de la O.I.T. 1991

La política pública constituye la aplicación y desarrollo de sus derechos para que el Distrito Capital sea una sociedad más incluyente, participativa, respetuosa y humana. Busca garantizar acciones para la pervivencia, permanencia y fortalecimiento de la autonomía para la gobernabilidad de los pueblos indígenas y sus instituciones representativas en la ciudad, de conformidad con el derecho mayor, la ley de origen y la ley natural en armonía con la constitución y la ley.

En cuanto a la consulta previa, participación y concertación se garantiza la participación e interlocución de los pueblos indígenas en las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos en su plan de vida, a través de la aplicación del derecho fundamental y colectivo a la consulta previa, libre e informada, para garantizar su permanencia y pervivencia, la preservación de la integridad étnica, social, económica y cultural en el distrito. En cuanto al derecho de identidad y cultura, realiza acciones que promueven, visibilicen y fortalecen la identidad cultural, espiritual, la producción simbólica de las culturas indígenas, las formas de vida, los usos y costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas en la ciudad.

Para garantizar la educación propia e intercultural, se ocupa de diseñar e implementar el sistema de educación indígena propio, SEIP, que permitan la permanencia y pervivencia de la identidad cultural de los pueblos indígenas. Para defender la economía indígena se busca el fortalecimiento de los sistemas productivos propios de los pueblos indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres, buscando un desarrollo sostenible y sustentable de economía y alimentación soberana. En relación con el derecho la salud y medicina ancestral, garantiza la atención integral en salud y cobertura total del régimen subsidiado para la población indígena, así como a la incorporación de las características culturales y particulares de la población indígena al modelo de atención integral en salud de Bogotá, D.C., y diseño de las rutas de atención que correlacionen la medicina ancestral y la medicina facultativa, y una vez aprobado el sistema integral de salud de pueblos indígenas —Sispi—, por parte del Gobierno Nacional.

Existen proyectos al interior de cada sector administrativo del Distrito que busca dar una respuesta efectiva a las necesidades de la población indígena víctimas del conflicto, lo que es esencial para la construcción de escenarios de paz. En ese sentido, el trabajo en la defensa de los Derechos Humanos, en Bogotá se ha iniciado, y dando resultados en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los indígenas que habitan la ciudad. En razón a la magnitud de necesidades que tienen los más de 15.000 indígenas que habitan la Capital, más los que diariamente están llegando por el desplazamiento forzado el Distrito Capital no logra una cobertura del 100%, en garantizar

el goce efectivo de los derechos humanos a todos los pueblos indígenas que viven en Bogotá, considero que para llegar al estado ideal de goce pleno de los derechos por parte de la población indígena, se requiere de la mayor inversión social, y la implementación la política pública, ampliando la cobertura, y para ello es necesario trabajar en coordinación con los entes territoriales y nacionales para lograr el retorno de estos pueblos a sus lugares de origen en condiciones de dignidad y seguridad.

El presente trabajo en su capítulo inicial describe como llegan los indígenas a Bogotá en su gran mayoría desplazados por el conflicto armado y corriendo por su vidas, también los que deciden viajar a Bogotá a probar suerte en busca de mejorar su calidad de vida y llegan con muchas esperanzas en busca de educación trabajo, salud, y el tercer grupo que encontramos es el indígena originario los Muiscas nativo especialmente de Bosa y Suba, todos ellos hacen parte de la población que habita la capital. Y todos tienen necesidades y demandan servicios públicos de la administración capitalina, algunos trabajan en artesanías, la gran mayoría en el sector informal, otros se dedican a la mendicidad. Bogotá tiene como política la protección de los cabildos indígenas de la ciudad como reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el Distrito Capital.

En el segundo capítulo se aborda la historia del pueblo Embera sus costumbres y se revisa la Sentencia T-380/93: Caso Chajera, Sentencia T652/98 Represa de Urra, la Sentencia T 769/09 Proyecto Mande Norte que tienen como común denominador la vulneración de los derechos a la vida, a la seguridad personal, a la consulta previa, asimismo el auto 004 de 2009 la Corte Constitucional define el alto riesgo de exterminio que sufren los pueblos indígenas, en la misma línea los informes de la CIDH 2005, 2009 resaltan como los derechos vulnerados a los pueblos indígenas son la autonomía, sus derechos territoriales y son víctimas de asesinatos, desapariciones

forzadas y masacres, en Colombia los pueblos indígenas por muchos años han sido víctimas de la violencia originada en la explotación minera ilegal de sus territorios y por proyectos algunos avalados por el Estado. Es tal la situación que la CIDH a otorgado Medidas cautelares en el año 2010 a la comunidad del Alto-Guayabal-Coredocito del pueblo Emberà, en el año 2002 para miembros del pueblo Embera Chami. Estas condiciones de peligro obligan a la población indígena a buscar refugio en Bogotá.

En el tercer capítulo se registra el trabajo de campo realizado en el acompañamiento de las 48 familias 220 personas de la comunidad Embera Katio del alojamiento de la calle 18 en Bogotá, este ejercicio práctico en el seguimiento a los compromiso de las entidades distritales y nacionales con la comunidad para lograr la ayuda humanitaria, estabilizar la comunidad, garantizar el goce de los derechos humanos: salud, educación, gobierno propio, y el retorno al territorio en condiciones de Dignidad, seguridad y voluntariedad. En síntesis, el conflicto armado en Colombia ha originado el desplazamiento forzado de los indígenas a la ciudad, la violencia es la razón de la continua y sistemática violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el problema es estructural e histórico, la pobreza, el hambre y el miedo que se vive en el territorio, traen más y más indígenas a la Capital, lo que hace más dura la tarea para la institucionalidad distrital, en este momento histórico del país que se ha firmado el acuerdo de paz, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, se vislumbra una solución con el impulso al campo con proyectos productivos, la organización de los territorios indígenas donde vivan de acuerdo a sus usos y costumbres en condiciones que les garantice el pleno y efectivo goce de sus derechos. En Bogotá se cuenta con proyectos y programas que buscan estrategias para dar respuesta a la gran demanda que significa la atención de la población indígena desplazada que a

diario llega a la Capital. Bogotá cuenta con la política pública para los pueblos indígenas que es: “Garantizar, proteger y restituir los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en Bogotá, mediante la adecuación institucional y la generación de condiciones para el fortalecimiento de la diversidad cultural, social, política y económica y el mejoramiento de sus condiciones de vida, bajo el principio del Buen Vivir.”

Referencias

Acción Social (2011), *Presidencia de la República*. Registro Único de la Población desplazada a febrero 28. Bogotá D.C.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2009, 6 de enero). Acuerdo 359. "Por el cual se establecen los lineamientos de política pública para los indígenas en Bogotá, D.C. Reg. Distrital 4130.

Alcántara M., (1995) *Gobernabilidad, crisis y cambio*. Fondo de cultura económica. México. Págs. 43-54.

Colombia, Corte Constitucional. (2000, 29 de marzo). *Sentencia C-371 de 2000*, MP: Carlos Gaviria Díaz. Ref.: p.e.-010, Bogotá, D.C.

Colombia. Corte Constitucional (2004, 22 de enero), *Sentencia T 025 de 2004*. MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Ref.: expediente T-653010, Bogotá, D.C.

Colombia. Corte Constitucional (2009, 26 de enero), *Auto No. 004 de 2009*: MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Ref.: Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado. Bogotá D.C.

Colombia, Ley 21 de 1991, "Por la cual se aprueba el Convenio No. 169 sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT. Bogotá D.C.

Colombia, Decreto Nacional 1320 de 1998 reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Bogotá D.C.

Colombia, Ley 22 de 1981, por la cual se aprueba la "Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial". Bogotá D.C.

Colombia Decreto Nacional 804 de 1995, "Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos". Bogotá D.C.

Colombia, Decreto 1811 de 1990, "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 10 de 1990, para la prestación de servicios de salud para las comunidades indígenas". Bogotá D.C.

Colombia, Decreto Nacional 1088 de 1993, "Por el cual se regula la creación de asociaciones de cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas". Bogotá D.C.

Colombia, Decreto Nacional 2164 de 1995, "...Titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional". Bogotá D.C.

Colombia, Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas, (2016) Actas de reunión Comité Interinstitucional. Marzo a agosto de 2016. Bogota, D.C.

Colombia, Unidad para la Atención y reparación Integral a las Víctimas, (septiembre, 2016) Informe *ref.: Reubicación Embera-katío, resguardo del Alto Andagueda (Bagadó-Chocó)*. Bogota, D.C.

Colombia. Defensoría del Pueblo. (2016, 18 de enero). Delegada para los indígenas y las minorías étnicas. “*Informe acompañamiento comunidad Indígena Emberá Katío, Resguardo del Alto Andágueda (Bagadó – Chocó). Traslado Coliseo del Campín a Albergue de la Unidad de Víctimas: Calle 18, Avenida Caracas No. 14-56*”. Bogotá D.C.

Colombia, Gobernación del Chocó. (2016). Acta Comité Técnico de Justicia Transicional. Chocó abril 2016

Colombia. Dane. (2005). Censo Nacional de Población. Bogotá

García, Antonio. (2004). *Una nueva forma de vivir en la ciudad. ¿Es posible un espacio público propiamente moderno en América Latina?* Universidad, Academia y Humanismo Cristiano. Núcleo de Antropología Urbana. Santiago de Chile. Universidad de Santiago.

Hoyos, Juan José. (1994). *El oro y la Sangre*. Editorial Planeta. Bogotá D.C

Informe anual (CIDH: 2005) <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4.htm>

Informe anual (CIDH: 2009) <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.4.htm>

Ministerio de Cultura. (2010) *Caracterización del pueblo Emberá-Katio*. Bogotá D.C.

Ministerio de Cultura. (2012) *Plan de Salvaguarda Emberá*. Bogotá D.C.

Molina H., (2012). *La población indígena y las ciudades*. Centro de Cooperación al Indígena – Cecoin-. Consultar en: <http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/index.php?option>

=com_content&view=article&id=321: la-poblacion-indigena-y-las-ciudades&catid=45:
indigenas -en-la ciudad&Itemid=103

Molina H., Sánchez E. (2010) *Documentos para la historia del movimiento indígena colombiano contemporáneo*. Biblioteca Básica indígena. Ministerio de Cultura. Bogotá D.C.

Molina H., (2007) Nuevos Escenarios de Vida Indígena Urbana: El caso de Bogotá. Revista Etnias & Política No. 4. Fundación Centro de Cooperación al Indígena -CECOIN-. Bogotá.

Molina H., (2006). *Entrevistas y notas de campo realizadas a los gobernadores de los Cabildos indígenas Muisca de Suba y Bosa, Ambiká y Kichuas*. Fundación Centro de Cooperación al Indígena -CECOIN-. Bogotá.

Molina H., (2005) *Socialización y Sistematización del taller Encuentro de líderes indígenas urbanos de la ciudad de Medellín*. Corporación La Casa Común, Alcaldía de Medellín. . Medellín.

Plan de Acción Cultura 2015-2020, para los pueblos indígenas residentes en Bogotá.
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/plan_de_accia3n_2015-2020.pdf

Pallares F., (1988). *Las políticas públicas: El sistema político en acción*. Revista de Estudios Políticos. No. 62.

- Sánchez, E. (2004). *Los Indígenas en las Ciudades ¿Siguen Siendo Indígenas?* Capítulo 13. En: Derechos Propios. Ejercicio Legal de la Jurisdicción Indígena en Colombia. Instituto de Estudios del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación. Bogotá, D.C. pp. 245-274.
- Suiza. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, (Junio 27 de 1989) "Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", Ginebra 1989
- Vasco L., (2000). *Los Emberá: Gente de selva, río y montaña*. Bogotá D.C. Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Ulloa E., (2004). *Los Emberá. Geografía humana de Colombia*. Región del Pacífico, Tomo IX. Instituto Colombiano de Cultura hispánica, Bogotá.
- Vía Plural. (2009). Informe Identificación y caracterización socioeconómica y cultural del Observatorio de la situación de los niños y niñas de las familias Emberá en Bogotá.
- Villa W. (1980). *Los indígenas del Alto Andágueda: minería y etnocidio*. En Caicedo Licon, El Chocó por dentro. Editorial Lealon. Medellín

Anexo 4.

Total de Población Indígena (Dane) en ciudades y total de población desplazada en el RUPD

Ciudades capitales	Total Pob. DANE En ciudades	Total general desplazados	% Población Desplazada
Bogotá, D.C.	15032	7288	48.48
Inírida	9178	3733	40.67
Valledupar	29060	3335	11.47
Cali	9466	2656	28.05
Mocoa	6476	2600	40.14
Popayán	7401	2128	28.75
Pereira	3115	2097	67.31
Riohacha	32168	1705	5.30
Pasto	2871	1481	51.58
Mitú	9315	1348	14.47
Florencia	997	1275	127.8
Cúcuta	5006	1064	21.25

Ciudades capitales	Total Pob. DANE En ciudades	Total general desplazados	% Población Desplazada
Santa marta	4055	963	23.74
San José del Guaviare	750	871	116.13
Medellín	2984	800	26.80
Villavicencio	1484	800	53.90
Cartagena	1469	763	51.94
Sincelejo	34262	751	2.19
Neiva	855	586	68.53
Quibdó	1504	573	38.09
Ibagué	3409	480	14.08
Armenia	1564	359	22.95
Barranquilla	903	286	31.67
Puerto Carreño	2753	260	9.44
Montería	1379	251	18.20

Ciudades capitales	Total Pob. DANE En ciudades	Total general desplazados	% Población Desplazada
Arauca	640	177	27.65
Leticia	8050	144	1.78
Yopal	115	129	112.17
Manizales	744	127	17.06
Bucaramanga	1091	55	5.04
Tunja	276	41	14.85
San Andrés	52	5	9.61
Total	198424	39131	

FUENTE: Dane. 2005. Censo Nacional de Población. DPS. 2011. Registro único de la Población Desplazada.

Anexo 2

Población indígena residente en la ciudad de Bogotá.

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Muisca	2912	2800	1	0	5713
Pijao	1366	1289	2	1	2658
Indígena sin información	541	573	3	3	1120
Nasa	302	434	0	0	736
Wayuu	251	311	0	0	562
Otavaleño	266	252	0	0	518
Inga	173	187	0	0	360
Uitoto	131	147	0	0	278
Pasto	147	127	0	0	274
Senu	98	106	0	0	204
Yanacona	101	95	0	0	196
Emberá Katío	84	74	0	0	158

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Sikuani	67	72	0	0	139
Guambiano	52	67	0	0	119
Kamkuamo	49	62	0	0	111
Kamentsa	55	50	0	0	105
Arhuaco	39	53	0	0	92
Indígenas Ecuador	58	34	0	0	92
Emberá Chamí	48	36	2	4	90
Cañamomo	60	25	0	0	85
Tikuna	26	54	0	0	80
Bari	40	36	0	0	76
Emberá	34	37	0	0	71
Uwa	41	28	0	0	69
Kubeo	24	39	0	0	63

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Guane	36	27	0	0	63
Nukak	28	24	0	0	52
Kawiyari	26	22	0	0	48
Tucano	20	25	0	0	45
Tule	28	13	0	0	41
Siona	25	14	0	0	39
Coconuco	15	17	0	0	32
Chimila	22	9	0	0	31
Yagua	14	17	0	0	31
Waunan	15	12	0	0	27
Bora	12	14	0	0	26
Tatuyo	14	12	0	0	26
Yukuna	11	14	0	0	25
Saliba	13	11	0	0	24

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Guayabero	11	12	0	0	23
AwaKuaiker	12	10	0	0	22
Kogui	12	10	0	0	22
Puinave	13	8	0	0	21
Kichwa	14	5	0	0	19
Desano	10	8	0	0	18
Wanano	5	13	0	0	18
Ocaina	12	6	0	0	18
Taiwano	8	10	0	0	18
Siriano	8	8	0	0	16
Carapana	6	9	0	0	15
Eperara Siapidara	7	8	0	0	15
Hitnu	9	6	0	0	15

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Makuna	5	10	0	0	15
Cocama	10	3	0	0	13
Coreguaje	7	6	0	0	13
Kurripako	7	6	0	0	13
Letuama	6	7	0	0	13
Pisamira	6	7	0	0	13
Totoro	6	7	0	0	13
Arzario	7	5	0	0	12
Tzase	8	4	0	0	12
Tanimuka	3	8	0	0	11
Tuyuka	4	7	0	0	11
Yuko	5	6	0	0	11
Bara	4	6	0	0	10
Yuruti	2	8	0	0	10

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Andoke	5	4	0	0	9
Barasano	3	6	0	0	9
Matapi	1	7	0	0	8
Piratapuyo	1	7	0	0	8
Chitarero	6	2	0	0	8
Chiricoa	3	4	0	0	7
Miraña	4	3	0	0	7
Mokana	0	7	0	0	7
Betoye	1	5	0	0	6
Makaguaje	4	2	0	0	6
Indígenas Perú	5	1	0	0	6
Achagua	4	1	0	0	5
Kofan	3	2	0	0	5
Yauna	3	2	0	0	5

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Panches	1	4	0	0	5
Karijona	3	1	0	0	4
Piaroa	4	0	0	0	4
Tariano	1	3	0	0	4
Quimbaya	3	1	0	0	4
Indígenas Mexico	1	3	0	0	4
Amorua	1	2	0	0	3
Kuiba	1	2	0	0	3
Guanaca	2	1	0	0	3
Tsiripu	1	2	0	0	3
Masiguare	0	2	0	0	2
Nonuya	0	2	0	0	2
Calima	1	1	0	0	2

Pueblo Indígena	Cabecera		Resto		Total
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Indígenas Bolivia	1	1	0	0	2
Dujos	1	0	0	0	1
Tairona	1	0	0	0	1
Total	7516	7500	8	8	15032

Fuente: Dane. Censo Nacional de Población 2005.

Anexo 3

Listado de población Emberá Katío en el alojamiento Calle 18, Avenida Caracas No. 14-56.

Cant. Familias	Cant. Participantes	No. De Personas	Apellido 1	Apellido 2	Nombres	Edad
1	4	1	Bitucay	Queragama	Marleny	29 Años
		2	Tequia	Bitucaí	Luz Edelmira	10 Años
		3	Tequia	Bitucay	Luz Zamira	9 Años
		4	Tequia	Bitucay	Luz Andrea	6 Años
2	6	5	Manugama	Arce	Evelio	31 Años
		6	Manugama	Queragama	Estella	31 Años
		7	Manugama	Manugama	Jhon Iver	10 Años
		8	Manugama	Manugama	Leiner	7 Años

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
1 Año	Yarluz	Manugama	Manugama	9		
9 Meses	Mari Novelina	Manugama	Manugama	10		
25 Años	Milicia	Arce	Manugama	11	5	3
21 Años	Emerito	Bitucay	Queragama	12		
7 Años	Elver	Manugama	Queragama	13		
2 Años	Mayerly	Manugama	Queragama	14		
9 Meses	Ingrid Johana	Manugama	Queragama	15		
30 Años	Feliciano	Queragama	Queragama	16	9	4

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
30 Años	Bertilda	Manugama	Sintua	17		
14 Años	Doralba	Sintua	Queragama	18		
12 Años	Casandra	Sintua	Queragama	19		
10 Años	Maria Patricia	Sintua	Queragama	20		
7 Años	Helmer	Sintua	Queragama	21		
5 Años	Edilma	Sintua	Queragama	22		
2 Años	Emiliano	Sintua	Queragama	23		
5 Meses	Anjelica	Sintua	Queragama	24		
25 Años	Elmer	Queragama	Murillo	25	5	5

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
24 Años	Leticia	Naturo	Queragama	26		
6 Años	Yandey	Queragama	Murillo	27		
4 Años	Jamer	Queragama	Murillo	28		
1 Año	Estix	Queragama	Murillo	29		
39 Años	Miguel Auxilio	Vitucay	Queragama	30	9	6
41 Años	Emilce	Arce	Sintua	31		
17 Años	Juan Carlos	Sintua	Queragama	32		
13 Años	Yesica	Sintua	Queragama	33		
12 Años	Calixto	Sintua	Queragama	34		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
11 Años	Luis Angel	Sintua	Queragama	35		
9 Años	Adriana	Sintua	Queragama	36		
6 Años	Rosalinda	Sintua	Queragama	37		
2 Años	Maria Rosney	Sintua	Queragama	38		
55 Años	Maximiliano	Vitucay	Queragama	39	6	7
43 Años	Maria Helena	Tequia	Naturo	40		
13 Años	Bertha Ligia	Naturo	Queragama	41		
12 Años	Evangelina	Naturo	Queragama	42		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
9 Años	Ritalina	Naturo	Queragama	43		
8 Años	Maria Gloria	Naturo	Queragama	44		
27 Años	Rodrigo	Queragama	Manugama	45	5	8
23 Años	Juanita	Cheche	Sintua	46		
5 Años	Duvanxido	Sintua	Manugama	47		
3 Años	Fran Walzon	Sintua	Manugama	48		
1 Año	Maria Dilvia	Sintua	Manugama	49		
45 Años	Luis Alfonso	Castama	Viricha	50	10	9
37 Años	Hercilia	Vitucay	Queragama	51		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
16 Años	Maria Elza	Queragama	Viricha	52		
14 Años	Robinson	Queragama	Viricha	53		
10 Años	Hervielira	Queragama	Viricha	54		
8 Años	Jhoneir Overlander	Queragama	Viricha	55		
6 Años	Ana Milena	Queragama	Viricha	56		
4 Años	Deisy	Queragama	Viricha	57		
2 Años	Andres	Queragama	Viricha	58		
8 Meses	Reyneilio	Queragama	Viricha	59		
40 Años	Odila	Campo	Vitucay	60	7	10

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
14 Años	Luz Mery	Vitucay	Flaco	61		
12 Años	Jorge Antonio	Vitucay	Flaco	62		
12 Años	Diana	Nariquiaza	Pepe			
9 Años	Bertha Alicia	Bitucay	Floco	64		
6 Años	Marcelino	Campo	Bitucay	65		
1 Año	Sara Lorena	Campo	Bitucay	66		
46 Años	Ovidio	Manundia	Tuabe	67	7	11
40 Años	Emilia	Campo	Vitucay	68		
11 Años	Monica	Bitucay	Tuabe	69		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
10 Años	Luz Delmira	Queragama	Tuave	70		
7 Años	Roberto	Vitucay	Tuabe	71		
4 Años	Rigoberto	Vitucay	Tuabe	72		
1 Año	Marisol	Campo	Tuabe	73		
65 Años	Matilde	De Queragama	Bitucay	74	2	12
10 Años	Erlinda	Queragama	Tequia	75		
23 Años	Rael	Arce	Manugama	76	3	13
21 Años	Estela	Queragama	Baniama	77		
2 Años	Yelinas	Baniama	Manugama	78		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
66 Años	Rosa	De Manugama	Queragama	79	2	14
63 Años	Ramiro	Queragama	Manugama	80		
23 Años	Gabriel	Manugama	Manugama	81	4	15
21 Años	Doralba	Queragama	Queragama	82		
2 Años	Maria Rosney	Queragama	Manugama	83		
7 Meses	Jimer	Queragama	Manugama	84		
21 Años	Rodrigo	Bitukay	Tuave	85	3	16
19 Años	Hilda	Rioverde	Murillo	86		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
2 Años	Paula Andrea	Tuabe	Queragama	87		
65 Años	Clara	Tascon	Sanapi	88	2	17
11 Años	Luz Adriana	Mamundia	Tequia	89		
52 Años	Clemencia	Queragama	Estevez	90	1	18
22 Años	Carlos	Arce	Queragama	91	2	19
23 Años	Maria Elena	Arias	Murry	92		
18 Años	Gonzalo	Arce	Queragama	93	3	20
18 Años	Nancy	Arce	Campo	94		
11 Meses	Romeo	Campo	Queragama	95		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
34 Años	Evelio	Queragama	Arce	96	6	21
34 Años	Maria Elena	Arce	Evao	97		
14 Años	Ermilda	Evao	Arce	98		
7 Años	Rosa Emilia	Evao	Arce	99		
3 Años	Yasson	Evao	Arce	100		
1 Año	Cristobal	Evao	Arce	101		
49 Años	Alfonso	Arce	Manugama	102	4	22
55 Años	Patricia	Queragama	Arce	103		
16 Años	Cisifredo	Arce	Manugama	104		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
5 Años	Luz Elena	Arce	Manugama	105		
19 Años	Ovidio	Arce	Evao	106	1	23
79 Años	Ana	De Murri	Murillo	107	1	24
69 Años	Isabel	De Naturo	Tequia	108	1	25
19 Años	Cristina	Queragama	Bateza	109	3	26
12 Años	Jose	Queragama	Bateza	110		
2 Años	Luz Nery	Queragama	Bateza	111		
23 Años	Aleison	Vitucay	Vitucay	112	3	27
15 Años	Maria Helena	Sintua	Vitucay	113		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
1 Año	Juan Guillermo	Vitucay	Vitucay	114		
23 Años	Bernardo	Manugama	Arce	115	5	28
18 Años	Roquelina	Manugama	Arce	116		
4 Años	Jhon Teran	Arce	Arce	117		
2 Años	Paula Maria	Arce	Arce	118		
1 Año	Winston	Arce	Arce	119		
21 Años	Robinson	Queragama	Murillo	120	4	29
18 Años	Luz Adriana	Tequia	Sintua	121		
2 Años	Yarleyda	Sintua	Murillo	122		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
1 Año	Kerlin Yohana	Sintua	Murillo	123		
21 Años	Arnoldo	Arce	Manugama	124	2	30
16 Años	Erika	Baniama	Queragama	125		
37 Años	Eduardo	Cheche	Sintua	126	7	31
31 Años	Rosalina	Murillo	Mury	127		
14 Años	Milton	Murry	Sintua	128		
12 Años	Ana Milena	Murry	Sintua	129		
7 Años	Ever	Mury	Sintua	130		
3 Años	Jose Gilber	Mury	Sintua	131		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
1 Año	Berly Johana	Mury	Sintua	132		
37 Años	Saul	Sintua	Arias	133	8	32
38 Años	Amparo	Sintua	Murry	134		
17 Años	Wilmar	Murry	Arias	135		
13 Años	Tiber	Murry	Arias	136		
6 Años	Leiner	Murry	Arias	137		
5 Años	Edilma	Murry	Arias	138		
3 Años	Dilmar	Murry	Arias	139		
1 Año	Dianela	Murry	Arias	140		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
23 Años	Hipolito	Campo	Mulato	141	4	33
21 Años	Cristina	Cintua	Vitucay	142		
1 Año	Pablo Romeo	Vitucay	Mulato	143		
4 Meses	Angela Patricia	Vitucay	Mulato	144		
25 Años	William	Cheche	Bateza	145	4	34
24 Años	Luz Helena	Arce	Estevez	146		
2 Años	Yerlinson	Estevez	Bateza	147		
11 Meses	Marci	Estevez	Bateza	148		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
24 Años	Eduardo	Tuave	Mamundia	149	7	35
24 Años	Luz Dary	Cintua	Sanapi	150		
14 Años	Ana Milena	Sintua	Sanapi	151		
6 Años	Maria Luz	Sanapi	Mamundia	152		
4 Años	Erlinda	Sanapi	Mamundia	153		
2 Años	Yojan	Sanapi	Mamundia	154		
1 Año	Franklin	Sanapi	Mamundia	155		
23 Años	Hercilia	Arias	Arias	156	1	36
43 Años	Carmelina	Murry	Vitucay	157	2	37

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
12 Años	Dario	Mulato	Bitucay	158		
60 Años	Idelvina	Bitucay	Esteve	159	1	38
26 Años	Maria Ines	Baniama	Esteve	160	4	39
6 Años	Jorge Luis	Esteve	Murry	161		
4 Años	Juan Camilo	Esteve	Murry	162		
1 Año	Juan Manuel	Esteve	Murry	163		
31 Años	Asael	Campo	Estevez	164	6	40
30 Años	Olivia	Campo	Arias	165		
13 Años	Marly	Campo	Esteves	166		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
7 Años	Andres	Arias	Estevez	167		
5 Años	Rodrigo	Arias	Estevez	168		
2 Años	Yaquelina	Arias	Estevez	169		
24 Años	Luis Carlos	Tequia	Sintua	170	6	41
25 Años	Cenelia	Sintua	Murillo	171		
5 Años	Nilson	Murillo	Sintua	172		
1 Año	Rocira	Murillo	Sintua	173		
3 Años	Yarli	Murillo	Sintua	174		
6 Meses	Estefanhy	Murillo	Cintua	175		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
32 Años	Licenia	Queragama	Bateza	176	3	42
7 Años	Juan Frailer	Bateza	Queragama	177		
2 Meses	Luz Marly	Queragama	Bateza	178		
56 Años	Filomena	Queragama	Tequia	179	2	43
13 Años	Rivaldo	Cheche	Queragama	180		
30 Años	Maria Eliza	Mamundi	Queragama	181	8	44
14 Años	Barlinton	Queragama	Tequia	182		
12 Años	Yeiner Hernando	Queragama	Tequia	183		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
11 Años	Maicol Jackson	Estevez	Tequia	184		
8 Años	Yurany Yorlana	Estevez	Tequia	185		
6 Años	Miladis	Estevez	Tequia	186		
3 Años	Dorali	Queragama	Tequia	187		
1 Año	Angela Mariana	Mamundia	Queragama	188		
35 Años	Juancho	Estevez	Murry	189	4	45
31 Años	Dora	Arias	Murillo	190		
2 Años	Anderson	Arias	Murry	191		

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
6 Meses	Luz Mary	Murillo	Murry	192		
23 Años	Pedro	Bitucay	Esteve	193	6	46
23 Años	Ibelina	Baniama	Vitucay	194		
12 Años	Caro	Vitucay	Esteve	195		
5 Años	Wilmar	Vitucay	Estevez	196		
1 Año	Ana Yuliana	Vitucay	Esteve	197		
3 Meses	Yeni	Bitucay	Esteve	198		
38 Años	Obidio	Murry	Bateza	199	1	47
23 Años	Hernan	Bateza	Queragama	200	3	48

Edad	Nombres	Apellido 2	Apellido 1	No. De Personas	Cant. Participantes	Cant. Familias
22 Años	Nolicia	Tequia	Sintua	201		
1 Año	Jamilton	Sintua	Queragama	202		

Fuente: Informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2016.

Anexo 4.

Acciones y actividades en el acompañamiento a los estudiantes de las etnias Embera-Katío.

Acompañamiento pedagógico	Acciones	Resultados
Espacios de formación docente sobre educación intercultural en Bogotá	Participación en semana de desarrollo institucional para abordar temáticas relaciones con educación intercultural.	<p>- Se implementó un taller de formación con toda la planta docente de cada colegio sobre estrategias pedagógicas interculturales, las cuales deben partir del reconocimiento de las identidades étnicas en la escuela.</p> <p>Se distribuyeron 55 ejemplares de la “Caja de Sabiduría Ancestral Indígena”, con un total de 150 módulos para realizar actividades de aulas con todos y todas los estudiantes de la institución, para fortalecer los procesos con los y las estudiantes Embera.</p> <p>Se hará seguimiento al uso del material distribuido en la institución para trabajar tanto con docentes de aulas regulares, como con docentes del Programa Volver a la Escuela.</p>
Conformación del equipo dinamizador	<p>Conformar un equipo dinamizador en cada una de las tres instituciones que lidere las acciones adelantadas con los procesos de educación intercultural.</p> <p>Consolidar espacios de reunión del equipo dinamizador para que se movilicen y materialicen las acciones concertadas.</p>	<p>- Se conformó el equipo dinamizador en cada una de las instituciones acompañadas, inicialmente con las docentes del aula diferencial indígena: Nelly Mosquera, Gloria Sarmiento y por los apoyos culturales indígenas Carlos Queragama, Eduardo Mamundia y Olga Zapata Arce.</p> <p>Se espera que a partir del segundo semestre del 2016 se sumen más docentes al equipo.</p>

<p>Plan de trabajo institucional</p>	<p>Con el objetivo de orientar a las instituciones para que transversalizaran el enfoque diferencial étnico en apuestas educativas interculturales, el equipo de la DIIP promovió el diseño de un plan de trabajo institucional que busca brindar 7 (siete) estrategias que deben ser promovidas por cada institución educativa, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. conformación de equipo dinamizador, 2. realización de espacios de formación docente, 3. revisión del PEI y lo que ello implica: manual de convivencia, SIE, participación estudiantil, 4. Revisión de mallas curriculares y planes de estudio, 5. acompañamiento de apoyos culturales, 6. Adelantar procesos de corresponsabilidad con las comunidades indígenas, 7. Conformar Red de maestros y maestras que promuevan el intercambio de experiencias significativas. <p>En este sentido, se busca que cada colegio establezca un plan de trabajo con cada una de las estrategias propuestas, y que desde los diferentes espacios institucionales se promuevan las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos por cada estrategia.</p>	<p>- Se socializó la propuesta del plan de trabajo institucional con cada uno de los tres colegios.</p> <p>Se espera trabajar en este aspecto en el segundo semestre del año, una vez se consolide el equipo dinamizador.</p>
--------------------------------------	--	---

Implementación de estrategia pedagógica en el aula diferencial indígena	<p>Para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los y las niñas indígenas que se encuentran en el aula diferencial, la DIIP orienta una estrategia pedagógica liderada por los apoyos culturales que busca generar procesos de planeación pedagógica conjunta, que permitan alcanzar los objetivos del aula diferencial. Estos objetivos son: desarrollo de habilidades las comunicativas del español como segunda lengua, y desarrollo de pensamiento matemático.</p>	<p>- Se socializó la estrategia pedagógica con las maestras del aula diferencial, realizando sus respectivos aportes, si e acordó que las planeaciones pedagógicas se harán teniendo en cuenta las respectivas orientaciones, en pro del diseño e implementación de estrategias pedagógicas interculturales que aporten a los procesos académicos y convivenciales.</p> <p>- Los apoyos culturales planean su intervención pedagógica de acuerdo al formato de planeación pedagógica y desde allí se proyecta el camino para aportar a los procesos del aula y al fortalecimiento de la identidad cultural.</p>
Espacios de actualización con los docentes del Programa Volver a la Escuela	<p>Diálogo constante con docentes de las aulas diferenciales indígenas cuyo fin es construir estrategias pedagógicas contextualizadas y fomentar prácticas pedagógicas interculturales.</p>	<p>- Se concertan como mínimo dos reuniones mensuales con las docentes del aula diferencial Nelly Mosquera y Gloria Sarmiento para hacer seguimiento a los avances, dar continuidad al proceso, y valorar el trabajo de los apoyos culturales e identificar aspectos a mejorar.</p>
Espacios de interlocución con la comunidad	<p>Desde la institución es preciso identificar estrategias que permitan mejorar los procesos de comunicación con los pueblos indígenas, promoviendo una relación de corresponsabilidad donde se asumen responsabilidades compartidas, pensando en mejorar los procesos</p>	<p>Por parte del equipo de educación intercultural de la DIIP se llevaron a cabo dos talleres, uno con la comunidad Embera Katío y otro con la comunidad Embera Chamí que se encuentra en los alojamientos, con el fin de generar un primer acercamiento con la comunidad y promover reflexiones en torno a la importancia de tener sentido de corresponsabilidad y, así, todos y todas aporten al mejoramiento de los procesos de educación con las niñas y niños.</p>

	<p>educativos de los y las estudiantes indígenas.</p> <p>Por ende como acción se identificó la necesidad de liderar espacios de reflexión en los dos alojamientos embera, con los y las acudientes indígenas para motivar y mejorar los canales de comunicación con la institución.</p>	
Apoyos culturales indígenas	<p>Como parte de las estrategias institucionales de acompañamiento se encuentra la participación de los apoyos cultural indígenas, quienes tienen como objetivo acompañar a los y las niñas indígenas en sus procesos académicos y convivenciales, aportando desde su identidad cultural y desde el uso de sus idiomas propios.</p> <p>Dicho acompañamiento en el caso del colegio Agustín Nieto Caballero se realiza en aulas regulares, aulas de aceleración primaria y aceleración secundaria, y aula diferencial.</p>	<p>- Acompañamiento a aulas diferenciales con los apoyos culturales Carlos Queragama y Eduardo Mamundia realizando las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo a procesos de aprendizaje del español como segunda lengua. 2. Actividades de fortalecimiento a la identidad cultural. 3. Apoyo a procesos de formación docente. 4. Fortalecimiento y uso del idioma propio. <p>Se han acompañado aulas regulares de primero a quinto y a aulas de aceleración primaria, con el apoyo cultural Olga Arce, donde se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acompañamiento a procesos de convivencia de los y las estudiantes. 2 Acompañamiento a procesos académicos en el área del español.

Fuente: Informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2016.